

EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN COLOMBIA

BAYRON ATENCIO DE LA ESPRIELLA

TEMYS ATENCIO DE LA ESPRIELLA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA

FACULTAD DE DERECHO

BARRANQUILLA

2010

EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN COLOMBIA

BAYRON ATENCIO DE LA ESPRIELLA

TEMYS ATENCIO DE LA ESPRIELLA

Monografía de grado presentada como requisito para obtener el título de
ABOGADO.

Director:

Dra. AMPARO ESCORCIA MANOTAS

Abogada.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA

FACULTAD DE DERECHO

BARRANQUILLA

2010

NOTA DE ACEPTACION

ASESOR: _____

JURADO: _____

JURADO: _____

Barranquilla, Agosto 2.010

DEDICATORIA

Dedicamos este trabajo de grado a DIOS, por si infinita misericordia y bondad hemos podido alcanzar este logro.

A nuestros padres Guillermo y Ludys.

A nuestros hijos Juan Sebastián, Cristian André y Joyce Carolina.

A nuestras esposas: compañeras inseparables de nuestra vida y nuestra dedicación: Karem y Gina

RESUMEN

Desde los mismos albores del concepto de ESTADO, se ha buscado un referente en que descansar la autoridad de este sobre el resto de instituciones, ese referente actual es la supremacía de la constitución donde se encuentra inmersa el origen, características y fundamentos del control constitucional.

Esta idea entonces evoca la protección de la eficacia del texto constitucional a través de un órgano institucional, protección que ha ido evolucionando por distintos estadios hasta llegar al control jurisdiccional e integral de la constitución. En ese orden de ideas el Control Constitucional actual se caracteriza principalmente por aplicar de manera directa la constitución por encima de todas las otras normas de la nación, y de esta manera su aplicación e interpretación hecha por el Tribunal Constitucional obligue a los demás órganos del Estado a través de los llamados sentencias constitucionales.

En Europa dentro de estas sentencias se puede señalar los aditivos, los exhortativos y los manipulativos. En Colombia se han acogido y ampliado estas teorías a través de los sentencias de inconstitucionalidad simple, parcial o diferido y también a través de los sentencias modulativos cuales son los de interpretación condicionada, el sentencia constitucional integrador, la declaración de estado de cosas inconstitucional y el sentencia interpretativo de derechos fundamentales.

Todo lo anterior con potestad de señalar los efectos en el tiempo y espacio por la misma Corte Constitucional.

PALABRAS CLAVES: Estado, control constitucional, Tribunal Constitucional, constitución nacional, sentencias constitucionales, supremacía constitucional, estado de cosa inconstitucional y constitucionalidad.

ABSTRACT.

From the very beginning of the concept of state, has sought a reference on which to rest the authority of this over other institutions, the current reference is the supremacy of the constitution which is immersed the origin, characteristics and foundations of constitutional control.

This idea then evokes the effective protection of the Constitution through an institutional body, a protection that has evolved through different stages until it reaches the court and integral control of the constitution. In that vein Constitutional Control is characterized mainly by directly applying the constitution above all other rules of the nation, and thus its application and interpretation by the Constitutional Court obliging the other state bodies through the so-called constitutional precedents.

In Europe under these precedents may point additives, hortatory and manipulative. Colombia has received and extended these theories through simple constitutional precedents, and partial or delayed by the preceding module which is the subject of interpretation, the inclusive constitutional precedent, the declaration of unconstitutional state of affairs and previous interpretation of fundamental rights. All of the above noted authority on the effects in time and space by the Constitutional Court itself.

KEY WORDS: state constitutional control, the Constitutional Court, constitution, constitutional precedents, constitutional supremacy, something unconstitutional state of constitutionality.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	10
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	15
2. OBJETIVOS	17
2.1 OBJETIVO GENERAL	17
2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS	17
3. IMPACTO INTERNO DE LA INVESTIGACION	18
4 REFERENTE TEORICO	20
4.1 TEORÍA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL	20
4. 1. 1 Concepto de constitución.	20
4.2 DEFINICION DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD.	24
4.3 ALCANCES Y LIMITES DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD.	26
4.4 TIPOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL SEGÚN LA NATURALEZA DEL ÓRGANO QUE LO EJERCE.	28
4.5. CONTROL POR UN ÓRGANO POLÍTICO.	29
4.6. CONTROL POR UN ÓRGANO JURISDICCIONAL.	30
4.6.1 Control concentrado o sistema europeo de control constitucional.	31
4.6.2 Control Difuso O Sistema Norteamericano De Control Constitucional	32

4.6.3 Control integral o mixto de constitucionalidad.	35
4.7 CONTROL POR UN ÓRGANO ESPECIAL.	37
4.8 APLICACIÓN DEL CARÁCTER NORMATIVO DE LA CONSTITUCIÓN EN EL CONTROL CONSTITUCIONAL.	38
4.9 APLICACIÓN NORMATIVA DE LA CONSTITUCIÓN EN EL MODELO NORTEAMERICANO DE CONTROL.	40
4.10 APLICACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN EN EL CONTROL EUROPEO DE CONSTITUCIONALIDAD	44
4.10.1 Tipos De Sentencias de Constitucionalidad en el control de constitucionalidad Europeo	45
4.10.1.1 Sentencias de constitucionalidad aditivas.	48
4.10.1.2 Sentencia de constitucionalidad interpretativa.	49
4.10.1.3 Sentencia de constitucionalidad exhortativa.	51
4.10.1.4 Sentencias de constitucionalidad manipulativas.	53
Las sentencias de constitucionalidad manipulativas son	53
4.11 EFECTOS EN EL TIEMPO Y ESPACIO DE LOS SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD EUROPEAS	54
5. IMPACTOS Y RESULTADOS ESPERADOS.	56
6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.	58
6.1. ASPECTOS MÁS SOBRESALIENTES DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE COLOMBIA.	58

6.2 TIPOS DE SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD EN EL CONTROL CONSTITUCIONAL COLOMBIANO	60
6.2.1 Sentencias de constitucionalidad e inconstitucionalidad en la Corte constitucional Colombiana	61
6.2.2 Sentencias modulativas de la Corte constitucional Colombiana.	67
6.2.3 Sentencia de interpretación condicionada constitucional.	68
6.2.4 Sentencia de constitucionalidad integradora.	71
6.2.5 Estado de cosas inconstitucional.	76
6.2.6 Sentencia interpretativa de derechos constitucionales.	79
6.3 CARÁCTER VINCULANTE Y EFECTOS DE LOS SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANO	82
6.3.1 Efectos espaciales.	85
6.3.2 Efectos temporales.	89
6.4 APLICACIÓN DE LAS SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD POR PARTE DE LOS JUECES PARA RESOLVER CASOS POSTERIORES.	91
BIBLIOGRAFÍA	102
ANEXOS	106

LISTA DE ANEXOS.

	Pág.
ANEXO A: Cuadro de sentencias expuestas en el trabajo final	107
ANEXO B: Cuadro comparativo modelos de sentencias utilizadas en Europa y Colombia	118
ANEXO C: Modelo de encuesta sobre el carácter vinculante de las sentencias constitucionales en la practica judicial Colombiana.	121
ANEXO D: Tabla de resultados encuesta	123
ANEXO E: Gráfica posibilidad de aplicación del sistema de sentencias precedenciales en Colombia	125
ANEXO F: Gráfica sistema sentencias precedenciales afecta la independencia del juez	126
ANEXO G: Gráfica actuación de la Corte Constitucional Colombiana Interprete de la constitución nacional	127
ANEXO H: Gráfica frecuencia con la que utiliza las sentencias Precedenciales para dirimir casos distintos a los de tutela	128
ANEXO I: Gráfica frecuencia con la que utiliza las sentencias Precedenciales para dirimir casos de tutela	129

INTRODUCCION

La Corte constitucional es el único órgano que puede hasta cierto grado auto determinar el alcance de su intervención, porque es máxima autoridad sobre los parámetros del control que ejerce. Por eso la vinculación a una metodología consistente es tema clave de la ubicación de una Corte constitucional en el concierto de los grandes órganos del Estado.

Desde antaño, la interpretación constitucional oscila entre dos polos: la sumisión a cánones establecidos y, el ajuste de las normas a los cambios de la realidad externa. La idea de la constitución como orden durable, preferiblemente eterno, estimula un vaivén permanente entre el texto constitucional, las condiciones de convivencia y los conceptos prevalecientes en la sociedad.

Podemos considerar ese juego como oxígeno en el corsete del texto constitucional, como aceite en la mecánica de interpretación. Por otro lado, el carácter de la constitución como Ley exige un mínimo de metodología, garantizando cierta previsibilidad de la interpretación constitucional. Este carácter como ley, se manifiesta en los clásicos criterios de interpretación (interpretación literal, sistemática, histórica y teleológica).

La jurisprudencia constitucional se caracteriza por un fenómeno universal: una elasticidad grande en la escogencia de la metodología y la libertad de ajustar los

parámetros de la interpretación a lo que parece oportuno en el contexto dado. Esa discrecionalidad caracteriza el esplendor y la miseria de la jurisprudencia constitucional en general.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Dentro de la realidad jurídica mundial se da por sentado hoy en día que todo Estado es o debe ser un Estado de derecho que no es más que el sometimiento de las autoridades publicas y de los particulares a la organización jurídica nacida de la voluntad soberana. Modernamente esta concepción conserva su vigencia bajo la forma del Estado social de derecho, sistema con el cual se busca proyectar con contenido social la estructura jurídica del Estado.

Dentro de esta concepción de Estado social de derecho tiene una especial posición la constitución nacional que es considerada como la base y fundamento de todo el ordenamiento positivo que encuentra en ella su inspiración y fuente de validez, es la expresión de la voluntad general del constituyente.

Este rol tan importante que ocupa la constitución de un Estado, necesita en el sistema político un sistema de protección y control que guarde su transparencia e intangibilidad.

Es por esto que se ha establecido el llamado control de constitucionalidad que es realizado por un ente guardián y protector del fundamento del ordenamiento jurídico cual es la constitución nacional de cualquier Estado, es mas en la mayoría de caso es el mismo estatuto máximo quien ordena la existencia y conformación

de dicho organismo dándole ella misma las pautas primordiales para su funcionamiento.

Este control ha ido evolucionando en cada Estado de forma particular teniendo cada uno sus propias características, algunas le son comunes a varios de ellos otras son única y particulares de cada cual , en lo que si han estado de acuerdo diversos tratadistas es en la importancia que este control tiene dentro del desarrollo jurídico y legislativo del respectivo Estado y es esta relevancia lo que ha llevado a ese ente guardián de la constitución a asumir según sea el caso un papel preponderante en la realidad jurídica del país llegando a tal punto que hoy es valido cuestionarse:

¿Que factores determinan los alcances jurídicos del control de constitucionalidad?

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar la evolución de las diferentes formas de ejercer el Control Constitucional con énfasis en el modelo Colombiano.

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS

- Describir los aspectos más sobresalientes del Control de Constitucionalidad en Colombia.
- Identificar con ejemplos los tipos de sentencias utilizados en el control de constitucionalidad colombiano
- Determinar el carácter vinculante y los efectos de las sentencias de constitucionalidad en el control de constitucionalidad Colombiano.
- Identificar la aplicación o no por parte de los funcionarios judiciales de la doctrina constitucional en al resolución de procesos de tutela

3. IMPACTO INTERNO DE LA INVESTIGACION

Siendo la CUC una institución cuya misión formar un ciudadano integral cuyas características entre otras sean la de la búsqueda de la excelencia académica e investigativa, es menester señalar que esta investigación sirve como punto de referencia a todo aquel investigador que desee profundizar en el sentido hermenéutico y el espíritu que anima tanto la teoría constitucional como la propia constitución colombiana y la aplicación práctica que la norma fundamental frente a situaciones específicos de la sociedad nacional, y aun permite esta investigación que el analista de ella confronte los anteriores elementos frente a las practicas y doctrinas constitucionales de otros modelos de control constitucional del mundo.

Entendiendo que el perfil del abogado formado en la CUC, uno de sus elementos es el de realizar una interpretación cabal de la ley siguiendo la hermenéutica jurídica, la presente investigación permitirá en principio coadyuvar a la comprensión y el análisis crítico de las prácticas de control constitucional en Colombia comparado frente a los otros modelos existentes en el mundo, generando de esta manera en los lectores y analistas de la presente investigación un cabal entendimiento del desarrollo normativo y teleológico del concepto y carácter normativo de la constitución, pudiendo de esta manera enriquecer su visión hermenéutica sobre el Estatuto Máximo de la Legislación Colombiana .

Por ultimo es de señalar, que esta investigación tiene impacto sobre el mundo jurídico externo al claustro universitario, en la medida en que se convierte en un texto ilustrativo, comprensivo y explicativo, además de analítico y sintético, de las distintas tendencias que en materia de control constitucional imperan en la realidad hermenéutica y socio-jurídica de la aplicación normativa de la constitución en los distintos modelos de juicio de constitucionalidad que existen en el mundo, confrontados con los aplicados por el Tribunal Constitucional Colombiano.

4 REFERENTE TEORICO

4.1 TEORÍA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL

4. 1. 1 Concepto de constitución.

Desde la misma aparición del ESTADO la idea de una norma fundamental y soberana que diera legitimidad a los poderes que se ejercían sobre el conjunto de la población empezó a hacer sus esbozos. Es decir, se buscaba un referente que permitiera al ESTADO como entidad jurídicamente organizada ejercer su autoridad sobre sus súbditos.

A raíz de la aparición de los movimientos demoliberales de los siglos XVII y XVIII y al desplazar la teoría del derecho divino de los reyes y el absolutismo monárquico del que estos gozaban, los creadores de la nueva teoría del ESTADO fueron en busca de una entidad normativa que sirviera de marco jurídico y referencial a la nueva organización del poder que se había constituido bajo las teorías de JOHN LOCKE y el conde de MONTESQUIEU.

En ese orden ideas y para dar mayor unidad a su teoría del poder estatal los creadores del estado norteamericano moderno esbozaron la constitución de 1777 que buscaba entre otras cosas legitimar la autoridad del congreso de la unión y darle vida jurídica a la figura presidencial y a los tribunales judiciales nacidos de la

concepción del Estado demoliberal que acababa de ser constituida, es así como en la historia los norteamericanos llevan a la práctica por primera vez las doctrinas de la ilustración.

Al efectuarse el triunfo del movimiento constitucionalista en el Estado moderno la teoría de la constitución ha tomado un papel preponderante dentro de la doctrina jurídica toda vez que dentro de la norma constitucional se encuentra subsumida de una u otra forma el conjunto de la legislación positiva de un ESTADO concreto, en ese sentido el concepto de constitución ha sido definido de distintas formas dentro de las cuales podemos citar algunas:

Hans Kelsen dentro de su teoría constitucional señala a la constitución desde dos puntos de vista básicos, un sentido formal y un sentido material.

Para Kelsen, en un sentido formal la constitución es la norma fundamental o hipótesis básica la cual no es creada conforme a un procedimiento jurídico sino que constituye un presupuesto básico de validez de las normas que constituyen el sistema jurídico por lo que su normativa constituye un documento legal supremo que solo puede ser modificado mediante la observancia de prescripciones especiales cuyo objeto es dificultar la modificación de tales normas.¹

¹ Kelsen, Hans. La Garantía Jurisdiccional de la Constitución, Editorial. UNAM, México, 2001, 1ª Edición, Pág. 5.

De otro lado, la constitución en su sentido material se interpreta debido a su contenido el cual regula a los órganos superiores del ESTADO y su respectivas competencias además contempla las relaciones del hombre con el poder estatal y los derechos fundamentales del individuo lo que indica que puede o no estar escrito en un documento único.

Por último, George Bordeau señala que la constitución es el estatus del poder político convertido en instrucciones estatales, lo que significa que el texto constitucional es la institucionalización del poder que se ha constituido según determinado procedimiento sea cual sea.²

En síntesis, podría decirse que la constitución en el Estado moderno es la norma que regula la interacción del hombre con el ESTADO, reconoce los derechos del ser humano y organiza las distintas funciones de ESTADO regulando las competencias entre los distintos poderes que lo constituyen estableciendo así las bases para su gobierno.

En el sentido anteriormente mencionado, y de acuerdo con la teoría de la constitución que siempre ha considerado a esta como la norma fundamental de lo cual depende el ordenamiento positivo, se ha elaborado el principio jurídico de la supremacía constitucional según la cual la constitución es la ley suprema que

² BURDEAU, George. La Democracia. Citado por Vila Casado, Iván en Estudios de Derecho Constitucional Contemporáneo, Edit. Legis, Bogotá, Colombia 2007, Pág. 52.

obliga tanto a gobernantes como a gobernados. En ese orden de ideas en el estado moderno se reconoce que el texto constitucional tiene primacía sobre cualquier otra norma en el territorio de un ESTADO.

El principio de la supremacía de la constitución deriva importantes consecuencias, en primer lugar ella asegura para los participantes de toda la comunidad un refuerzo de la legalidad ya que todo acto contrario a una norma jurídica positiva de más alta autoridad debe ser considerado desprovisto de valor jurídico, inclusive en el caso que este acto emane de los gobernantes.

En segunda instancia, el concepto de supremacía de la constitución se opone a que el órgano investido de una competencia determinada ejerza sus funciones por fuera de la misma o abuse de ellas.

Como un tercer aspecto, la supremacía de la constitución se opone a que cualquier institución estatal delegue las competencias propias de ella sin estar autorizada para ello. En efecto no es posible delegar un poder del cual no puede disponer por si mismo y los gobernantes no tienen un derecho propio sino el que la constitución les ha conferido.

4.2 DEFINICION DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD.

El concepto de control constitucional es bastante extenso en su comprensión ya que comprende un conjunto de mecanismos sociales políticos, institucionales, individuales y colectivos que se ponen en movimiento para asegurar el respeto a los derechos fundamentales de las personas y la vigencia del orden jurídico y político y sus diversos niveles y expresiones asegurados por la constitución.

En la doctrina constitucional moderna y de manera más restringida se denomina control constitucional a la función que ejerce un determinado órgano del ESTADO con el fin de proteger el texto constitucional de posibles violaciones por parte de normas jurídicas de inferior jerarquía. Si bien este concepto es de suyo antiguo entre la doctrina jurídica en la actualidad se considera que el control constitucional nace verdaderamente cuando un órgano independiente del ESTADO se crea o se le faculta para ejercer tal actividad.

El control de constitucionalidad es un instrumento propio para asegurar los derechos fundamentales y de las minorías para resolver a favor del estatuto máximo la confrontación del texto legal con relación a la constitución y para ejercer la protección del derecho objetivo en sus aspectos materiales y formales mediante un procedimiento contencioso. En ese sentido el control de constitucionalidad es una expresión del principio de la supremacía de la constitución y las ideas basadas en la existencia de un derecho superior que es susceptible de protección

con base en la concepción suprema de los valores y derechos que hacen parte del texto constitucional.

En ese sentido, Dominique Roseau considera “que el control de constitucionalidad de la ley lejos de atentar contra la democracia es su garante porque permite imponer al parlamento y a todos los órganos del ESTADO el respeto de la constitución considerada como expresión suprema de la voluntad general y de la soberanía popular”.³

Todo lo anterior ha llevado a considerar al doctrinante jurídico actual que el ESTADO de derecho se encuentra asegurado con la existencia del control de constitucionalidad, en ese sentido George Bordeau considera que:

“ el Estado de derecho tal y como es concebido el día de hoy implica de una parte la existencia de controles jurisdiccionales tendientes a hacer respetar la jerarquías de las normas y de otra parte la igualdad de los ciudadanos ante la ley (...) en primer lugar según la teoría del estado de derecho existe un juez competente para controlar la actividad del parlamento y notablemente la conformidad de las leyes a la constitución así la supremacía de la constitución es asegurada gracias a las instituciones propuestas por la justicia constitucional”.⁴

En tal camino añade Luis Favoreau “la justicia constitucional tiene como objetivo garantizar la asignación de las competencias entre la legislación ordinaria y la

³ ROSSEAU, Dominique. La justice constitutionnelle en Eitrope, citado por BERNAL CANO, Natalia en El Control de Constitucionalidad de la Ley: Un Estudio Comparativo en Francia y Colombia. Página. 70.

⁴ BORDEAU, George. Op cit. Pág 55.

legislación constitucional asegurar el respeto de la competencia del sistema de reglas o del órgano supremo del orden estático”.⁵

4.3 ALCANCES Y LIMITES DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD.

De los mismos fines antes reseñados del control de constitucionalidad, es decir del objetivo de ser garante de la supremacía de la constitución y de la institucionalidad del estado de derecho, se desprende también el hecho que este control debe tener un ámbito delimitado jurídicamente en el cual puede desarrollarse, so pena de que el mismo control constitucional en vez de garantizar la inmunidad del estatuto máximo le sustituya, subvirtiendo así su supremacía.

Es resaltable el hecho que desde su misma creación se procuro que la función de control de constitucionalidad no fuera invasiva de las competencias propias y excluyentes del legislador y aun de las del mismo constituyente, al punto que su máximo exponente Hans Kelsen consideró que era necesario que la actividad del control constitucional estuviera limitada a la confrontación del texto legal con el constitucional y consecuentemente a la decisión de declarar o no constitucional una ley.

No obstante lo anterior, el concepto mismo de los limites y alcances del control constitucional ha ido evolucionando con el paso del tiempo de la misma forma que

⁵ FAVOREU, Louis, Les Cours Constitutionnelles, citado por VILA CASADO, Iván, Óp. Cit. Pág. 145

ha ido variando la importancia del tribunal constitucional en el estado contemporáneo y el desarrollo de su actividad.

Hoy por hoy, es razonable considerar que los alcances del control constitucional están determinados en la practica primero por el tipo de órgano que lo ejerce y el origen de este mismo, ya que el análisis del texto legal frente a la constitución tendrá mas o menos profundidad jurídica dependiendo si es un órgano político que lo hace por motivaciones políticas, si es un órgano judicial común cuyo estudio está limitado a un caso concreto o si lo hace un órgano especializado cuya labor es precisamente la interpretación, aplicación y garantía del texto constitucional.

El segundo factor mediante el cual se puede desentrañar los verdaderos alcances del control constitucional se refiere a la actividad y la metodología que se usa para aplicar el carácter normativo de la constitución frente al texto legal o incluso a situaciones fácticas. En ese caso el alcance de la función de control será mas o menos amplio dependiendo de la forma en que el tribunal constitucional aplique la constitución como norma directa ya sea frente a la ley o frente a un hecho particular, y a si mismo el poder de modificación o interpretación de la ley que haga el juez constitucional para adecuarlo al estatuto máximo.

El estudio de estos dos factores podrá determinar frente a que modelo y que alcances tienen el control constitucional en determinado estado contemporáneo, razón por la cual es necesario adentrarse en el estudio comparativo de los

modelos depurados de control existentes en el mundo y el tipo de decisiones que emite para aplicar el texto constitucional frente a la ley o a un hecho particular y como funcionan estos dos elementos en el caso de la Corte Constitucional Colombiana.

4.4 TIPOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL SEGÚN LA NATURALEZA DEL ÓRGANO QUE LO EJERCE.

El Control de Constitucionalidad ha evolucionado desde diferentes estadios y ha adquirido diversas formas de acuerdo al mismo desarrollo del movimiento constitucionalista de las naciones que integran el orbe. Si bien es cierto cada Nación cuenta con particularidades propias que hacen de ella un ente especial y exclusivo, no es menos real que hoy por hoy los países han terminado por coincidir en los aspectos esenciales de los ordenamientos constitucionales y se han agrupado alrededor de Modelos de Estado y Modelos de Guarda de la Constitución.

En ese orden de ideas, los Mecanismos de Control Constitucional se agrupan en diferentes tipos según el punto de vista que se les analice. Así se señalan diversos Modelos de Control del Estatuto Máximo según la naturaleza del órgano u órganos que realizan tal función.

Así hoy se habla del Control por un Órgano Político, el Control por un Órgano Judicial y por ultimo el control por un Órgano Especial.

4.5. CONTROL POR UN ÓRGANO POLÍTICO.

De las tres categorías que hemos enunciado esta es hoy la mas desechada por las Constituciones del Mundo, ya que en la actualidad se ha evitado colocar en el texto del Estatuto Máximo, la supremacía parlamentaria o gubernamental para controlarse a si mismos confrontando sus acciones con la Constitución.

El control por un órgano político se manifiesta cuando del desarrollo de la teoría de los poderes, este es asumido de manera absoluta por un órgano de naturaleza política, es decir, los parlamentos o los gobiernos de manera horizontal. Tiene sus bases en la teoría según la cual quien juzga las leyes debe estar por encima de ellas y no debe ser controlado en su función por las mismas.

Este control por vía legislativa tiene como figura representativa la establecida en el sistema constitucional francés a través de la figura del referé legislativo o la facultad que tenia el poder legislativo para dirimir las controversias que se suscitaban entre las jurisdicciones del ESTADO cuando un fallo había sido atacado en dos ocasiones por los mismos hechos. Esta corriente de control constitucional se mantuvo por muchos años como la predominante en Europa bajo el sistema de la supremacía parlamentaria.

En la era moderna se ha mantenido esta modalidad de control constitucional en los estados de Corte socialista donde prima la doctrina de la supremacía parlamentaria y en algunos estados de Asia, África y América latina como era el caso de Ecuador que hasta hace muy poco el Tribunal Constitucional era un mero órgano consultivo y la decisión final dependía del congreso unicameral.

4.6. CONTROL POR UN ÓRGANO JURISDICCIONAL.

Esta vía de guarda de la constitución es en la actualidad la predominante en los sistemas estatales del mundo, ha nacido bajo los auspicios de su mayor exponente y al que algunos consideran su principal impulsor Hans Kelsen quien en sus obras sostenía:

“Dado que precisamente en los casos más importantes de violación de la Constitución, Parlamento y Gobierno son partes en causa, se aconseja llamar para decidir sobre la controversia a una tercera instancia que esté fuera de esa oposición y que bajo ningún aspecto sea participe del ejercicio del poder que la constitución distribuye en lo esencial entre el parlamento y el gobierno. Que esa misma instancia reciba por ello un cierto poder es inevitable. Pero hay una gran diferencia entre confiar a un órgano ningún otro poder que no sea la función del control de la constitución y reforzar el poder de uno de los dos portadores del supremo poder mediante la atribución ulterior del control de la Constitución. Esta sigue siendo la ventaja fundamental de un Tribunal Constitucional, porque desde el principio no toma parte en el ejercicio del poder ni entra necesariamente en oposición con el Parlamento o con el Gobierno”⁶

Este sistema a su vez se ha dado en clasificar en tres modalidades que son:

- Control Concentrado o sistema europeo de control constitucional.
- Control Difuso o sistema norteamericano de control constitucional.

⁶ KELSEN, Hans. Op Cit. Pág. 25

- Control integral o mixto de constitucionalidad.⁷

4.6.1 Control concentrado o sistema europeo de control constitucional.

El control concentrado tiene inspiración Austriaca más exactamente Kelseniana ya que su gestor fue el purista Hans Kelsen. Se le denomina control europeo ya que en su mayoría ha sido el modelo implantado en Europa desde los años 20 y 30 que se ha desarrollado con mayor fuerza en las constituciones de los países de este continente.

Este sistema de control constitucional encuentra su principal punto de identificación en el hecho que tal labor esta asignada a un órgano jurisdiccional adhoc como resultado de encargarle a este la guarda de la supremacía de la constitución. Dicho tribunal encarna la competencia para decidir sobre toda materia relacionada con la constitucionalidad. Los efectos de las decisiones del mencionado tribunal tienen efecto erga omnes, es decir, para todos en forma general quedando la norma inválida o sin efectos en el momento de su inconstitucionalidad.

Hans Kelsen principal teórico del modelo de control constitucional concentrado defendió su teoría en el famoso escrito quien debe ser el defensor de la constitución:

⁷ VILA CASADO, Iván, Op Cit, Pág. 176

“Desde el punto de vista teórico la diferencia entre un Tribunal Constitucional competente para la casación de las leyes y un Tribunal Ordinario en lo civil, penal o administrativo, es que tanto éstos como aquél aplican Derecho y también generan Derecho; éstos producen sólo normas individuales, mientras que aquél aplicando la Constitución a un hecho concreto de producción legislativa y llegando a anular leyes anticonstitucionales no genera sino destruye una norma general, es decir, pone el actus contrarius correspondiente a la producción jurídica, o sea, que oficia de “legislador negativo”. Pero entre la función de un Tribunal Constitucional semejante y la de los Tribunales ordinarios se introduce una forma intermedia, muy digna de atención, con su derecho de control sobre leyes y decretos. Pues un tribunal que no aplica a un caso concreto una ley en razón de su inconstitucionalidad, o una ordenanza en razón de su ilegalidad, elimina una norma general y opera así también como “legislador negativo” (en el sentido material del término “ley”), Sólo que la anulación de la validez de la norma general está limitada a un caso y no a la totalidad –como la sentencia de un Tribunal Constitucional-, es decir, a todos los casos posibles”.⁸

En resumen, el control concentrado de constitucionalidad tiene su soporte en la facultad de interpretación y decisión que posee un único tribunal para solucionar los conflictos existentes entre la normativa inferior y el texto constitucional, toda vez que el mencionado tribunal judicial adquiere el poder de legislador negativo (y en la actualidad aun de legislador integral).

4.6.2 Control Difuso O Sistema Norteamericano De Control Constitucional.

El control difuso de constitucionalidad es el más antiguo hablando en términos de efectividad, que se desprenda directamente de un ordenamiento constitucional y consiste en la facultad atribuida a todos los jueces para declarar en un proceso concreto la inaplicabilidad de disposiciones legales o reglamentarias que sean contrarias al texto constitucional, se caracteriza entonces porque los juzgadores

⁸ KELSEN, Hans. Op Cit. Pág 52

del derecho no dictan o pronuncian fallos o sentencias con efecto general o erga omnes, sino por vía incidental o vía de excepción. Así pues, los casos mas visibles de este control se manifiesta cuando en el curso de un negocio jurídico, una de las partes afectada por la aplicación de una ley solicita el pronunciamiento del juez sobre la posible inconstitucionalidad de esa norma y por ende se pide su inaplicación.

Para algunos tratadistas europeos, como el caso de Mauro Capelleti este control no es efectivamente garantista sino anárquico puesto que coloca en grave peligro criterios como el de la uniformidad de las decisiones de control constitucional, ya que algunos jueces podrían inaplicar una ley estimándola inconstitucional, mientras que otros podrían aplicarla porque en su concepto no contradice la ley suprema. Además podría suceder que el mismo órgano judicial que ayer hubiese desaplicado una ley determinada, la aplicase hoy por haber cambiado de opinión sobre el problema de constitucionalidad.⁹

Sin embargo, estas críticas anteriores hoy en día no tendrían mucha validez a la luz del desarrollo jurisprudencial norteamericano toda vez que debido a dos elementos de la misma se asegura la uniformidad de las decisiones de constitucional: el stare decisis y la vinculación jurisprudencial de las sentencias federales sobre las estatales.

⁹ CAPELLETTI, Mauro, El "formidable problema" del control judicial y la contribución del análisis comparado, citado por CANO BERNAL, Natalia, Op Cit. Pág. 82

Sin abordar de lleno la figura del stare decisis también conocido como sentencia obligatorio considera que las sentencias o fallos tienen un valor especial y en tal sentido se convierten en vinculantes a los demás jueces en dos líneas, en línea vertical lo que quiere decir que la jurisprudencia emanada de una alta Corte que lo sentó vinculara en sus considerandos a las futuras decisiones de los jueces inferiores a esta y en sentido horizontal señalando que una decisión jurisprudencial se convierte en referente obligatorio hacia futuro para la sentencias del mismo tribunal, es decir que ha de volverse a la jurisprudencia ya sentada al decidir sobre un caso igual o parecido.

Estas dos consideraciones han dado como resultado que hoy las sentencias judiciales de control constitucional norteamericanas no se consideren interpartes sino inter pares, o sea que vinculan en los sentidos ya indicados para los demás casos que en el futuro se presenten.

El segundo principio hoy conocido como el de la supremacía de la Corte Suprema Federal señala que las sentencias de este alto tribunal unifican la interpretación de las normas constitucionales y vinculan a todos los órganos judiciales de los Estados Unidos incluyendo las Cortes supremas de los estados que componen la unión , en este sentido la Corte suprema ha establecido esta cláusula en le celebre fallo Martin V. Hunter's Lessee que defendió la competencia de la Corte suprema federal para revocar cualquier sentencia con el siguiente argumento decisivo

“un motivo de otra naturaleza perfectamente compatible con el respeto más por los tribunales estatales, induce a la concesión de un poder de apelación sobre sus decisiones. Este motivo es la importancia, incluso la necesidad de que se dicten decisiones uniformes en todos los Estados Unidos sobre todos los temas al amparo de la constitución. Jueces igualmente conocedores e íntegros en diferentes Estados pueden interpretar en forma de diversa la ley, un tratado o la propia constitución. Si no existiera una autoridad con competencia para revisar esas sentencias discordantes y disonantes a fin de armonizarlas y unificarlas, las leyes, los tratados y la Constitución de los EE UU serían diferentes en los diferentes Estados y no tendrían tal vez nunca la misma interpretación, fuerza y eficacia de dos Estados”¹⁰.

Esta sentencia una de las mas importante de los Estados Unidos es considerada para algunos juristas de mayor valor que el fallo Marbury vs. Madinson toda vez que consigue el propósito de la existencia de una instancia que unifica la interpretación de las normas básicas y en especial la de la constitución.

4.6.3 Control integral o mixto de constitucionalidad.

Esta característica de control surge como un punto medio entre el control concentrado y el control difuso, es decir, que combina elementos de estos dos tipos de control. Paradójicamente este control que ha sido calificado por algunos juristas como el más grado alto evolutivo en materia de guarda de la constitución no nació ni en Europa ni en el sistema judicial norteamericano, sino en países que son considerados del tercer mundo específicamente en Venezuela y Colombia.

La constitución venezolana de 1893 consagraba en su artículo 110 la acción popular de constitucionalidad y la excepción de inconstitucionalidad, en el sentido

¹⁰ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NORTEAMERICANA, Fallo Martin Vs. Hunter's Leese, citada por JUSTICIA CONSTITUCIONAL, Varios Autores, Legis, Bogotá,

de que cuando existiera una ley que se estimara contraria a la constitución podía acudir a la Corte suprema de ese país y así mismo en el curso de un proceso judicial podría pedirse al juzgador aplicar las disposiciones constitucionales en vez de una normativa legislativa o reglamentaria siempre que hubiera contradicción en las mismas. En Colombia se instauró un control en los mismos lineamientos establecidos para Venezuela a partir del acto legislativo 03 de 1910 concretamente en su artículo 41 que señalaba:

“ En dado caso de incompatibilidad entre la constitución y la ley se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales... a la Corte Suprema De Justicia se le conferirá la guarda de la constitución, en consecuencia además de las facultades que le confiere esta y las leyes tendrá las siguientes... definir definitivamente sobre la exequibilidad de todas las leyes y decretos dictados por el gobierno en ejercicio de las atribuciones que tratan los artículos 76 y 80 de la constitución nacional cuando fueren acusados ante ella por inconstitucionalidad por cualquier ciudadano”¹¹

Así pues este sistema de control de constitucionalidad tiene por un lado a todos los órganos jurisdiccionales del estado interviniendo en la protección constitucional por vía incidental y de otro lado un tribunal supremo de constitucionalidad y máximo intérprete de la carta política lo que permite un control unificado en materia constitucional, para preservar la supremacía constitucional este tribunal se encuentra facultado para tomar decisiones encaminadas a asegurar los elementos concentrados del sistema de control incluso se admite que los fallos judiciales puedan ser anulables cuando se aparten de la doctrina que en sede de unificación haya sentado el tribunal supremo de constitucionalidad.

¹¹ ZULETA CANO, José, Constitución Política Colombiana de 1991 Confrontada Con La De 1886, Edit. Librería Jurídica Sánchez R Ltda., Medellín, Colombia 2004, Pág. 10

4.7 CONTROL POR UN ÓRGANO ESPECIAL.

Este tipo de control si bien es de origen reciente, no es menos cierto que ha tenido un desarrollo amplio toda vez que el control judicial ha adquirido mayor vigencia en las constituciones modernas por el grado de respetabilidad que se le ha dado a las sentencias judiciales y por lo exitoso del modelo en los países en que se ha implementado.

Este control nace como una tercera vía entre los defensores del control por el órgano político y los defensores del control jurisdiccional ya que se aparta de manera sistemática de ambos sistemas. Tiene como referente principal y obligatorio el sistema de guarda constitucional establecido en la quinta república francesa, específicamente en la constitución de 1958 a partir de la figura del consejo constitucional quien no es un órgano judicial sino que tiene un alto grado político en su configuración, pero que de su desarrollo jurisprudencial a través de los fallos que desde las décadas del 70 ha pronunciado se entiende que no puede obedecer a ser un órgano estrictamente político es por lo que ha sido considerado un modelo sui géneris escapando a los sistemas tradicionales de control constitucional.

En resumen, el control por un órgano especial tiene como su principal característica que el ente encargado de la guarda constitucional no es precisamente un órgano judicial, pero tampoco puede señalarse como un órgano

Político sino que ejerce un papel de arbitro entre las instituciones del Estado incluyendo la propia rama jurisdiccional y acusando así mismo la nula presencia o influencia del control difuso.

4.8 APLICACIÓN DEL CARÁCTER NORMATIVO DE LA CONSTITUCIÓN EN EL CONTROL CONSTITUCIONAL.

A partir del desarrollo social e histórico que se ha tenido de la constitución y del concepto que de esta se maneja se ha venido cambiando la idea del alcance de la fuerza normativa de la constitución y de cuando es posible su aplicación directa.

En un principio se pensó que el texto constitucional era un documento que servía para recoger de manera general y abstracta los principios de unidad del Estado, garantías y libertades fundamentales y la división del poder en las distintas ramas que lo componen.

A raíz del viraje constitucional sentado sobre las bases de la doctrina Kelseniana de la juridicidad de la constitución y su valor normativo, así como de la elaboración jurídica que sobre el carácter regulador y activo que debe tener la constitución en un estado que han hecho los tribunales constitucionales europeos entre los que destacan en orden de importancia el Tribunal Constitucional Alemán, el Tribunal Constitucional Español y el concejo constitucional francés; hoy se puede tener un nuevo concepto de la constitución como fuente de Derecho normativo directo, es

decir que no requiere en la mayoría de los casos de un instrumento mediador para ser aplicada directamente y por el contrario por el hecho de ser aplicada directamente permite excluir cualquier otra norma o interpretación de una norma que le sea contraria.

El modelo de control constitucional ha variado radicalmente de las concepciones teóricas sobre las que lo fundó Kelsen puesto que en aquel momento el jurista Vienes señalaba que la ley en cierta forma era la que desarrollaba el texto constitucional y obviamente le daba alcance; razón por la cual Kelsen aboga porque el Tribunal Constitucional realice una labor subjuntiva mediante la cual exprese si la ley ha desarrollado de manera correcta la constitución o si la ha contrariado. Sin embargo, los tribunales constitucionales actuales han ido mas allá al señalar que si bien es cierto en algunos casos la constitución necesita ser desarrollada por la ley no es menos cierto que como norma jurídica puede ser aplicada directamente y es mas puede convertirse en guía interpretativa de la ley para hacer que esta sea congruente con los postulados del estatuto máximo.

De esta manera hoy es posible redefinir el carácter normativo de la constitución en los siguientes términos:

- “1. Se establece con absoluta explicitud que la constitución tiene valor normativo vinculante inmediato y directo como hoy en día los textos constitucionales lo rezan en su articulado.
2. Este carácter normativo inmediato, directo y vinculante parte de dos hechos, que la constitución es un elemento integrante del ordenamiento jurídico y además que la

constitución es la que expresa y desarrolla los valores superiores de todo este ordenamiento.

3. La vinculación normativa de la constitución afecta a todos los ciudadanos y a los poderes públicos, no solo al poder legislativo, de tal forma que la constitución no contiene solo instrucciones que solo la ley pudiera desarrollar sino que muy por el contrario contiene normas de validez y aplicación inmediata.

4. Este poder vinculante que se deriva del carácter normativo de la constitución tiene un plus de súper legalidad, en la medida en que la constitución es preeminente frente a cualquier norma u orden contraria a sus preceptos ya que ella es la base misma de su supremacía y la piedra angular de su eficacia”¹².

En concreto los tribunales constitucionales actuales han elaborado bases sobre las cuales han desarrollado el concepto de la aplicación directa de la constitución en el ordenamiento jurídico. Cada Tribunal Constitucional ha elaborado sus propias reglas y términos sobre las cuales aplica este concepto, pero debido a la universalización del mismo se toman como paradigmas el modelo norteamericano de control constitucional, el modelo europeo y por ultimo el modelo Colombiano.

4.9 APLICACIÓN NORMATIVA DE LA CONSTITUCIÓN EN EL MODELO NORTEAMERICANO DE CONTROL.

El modelo de control constitucional norteamericano pese a ser en teoría uno de los más amplios a la hora de verificar la compatibilidad de la constitución con otra norma jurídica, no es menos cierto que por el solo hecho de ser difuso sea más activo y tenga mas libertad de acción para que el juez inaplique la norma. En ese

¹² VARIOS AUTORES, Justicia Constitucional: El Rol de la Corte Constitucional en el Estado Moderno, Bogotá, Edit: Legis, Pág 56.

sentido, si bien en un aspecto como lo es el de que cualquier juez puede sentenciar la inaplicación de la norma jurídica frente a la constitución y darle efectos inter pares no es menos verdadero que también en la práctica la utilización de esta figura está altamente restringida por dos principios que le franquean.

En primer lugar, el principio del *Stare Decisis* impide que un juez utilizando conceptos etéreos y muy subjetivos viole la interpretación que al respecto haya hecho un juez de superior categoría. En efecto este principio hace obligatorio y vinculante las decisiones de los jueces superiores sobre los inferiores y aun más las decisiones que toma el mismo juez le obligan para casos posteriores por lo menos ha de cumplir con la carga de identidad y argumentación para apartarse de la línea jurisprudencial que había venido sentando.

Para citar solo un caso, al dictar la sentencia *Brown vs. Junta escolar* en la cual la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación racial en las escuelas se tuvieron que sortear distintos obstáculos jurisprudenciales, vale recordar que hasta este caso la doctrina constitucionalmente aplicable era la de separados pero iguales establecida en el caso *Plessy Vs Ferguson* en 1869 en la que se establecía que no violaba el principio de la igualdad el hecho de no admitir personas de raza negra en establecimientos exclusivos para personas de raza blanca, siempre y cuando la misma prohibición fuera válida para las personas de raza blanca en establecimientos exclusivos de raza negra.

En el caso de Brown Vs Junta escolar, el juez de primera instancia y el tribunal de Kansas, estado donde ocurrieron los hechos que dieron lugar a la sentencia, no pudieron desconocer el sentencia que ya existía del caso Plessy vs. Ferguson que dictaminaba la doctrina de separados pero iguales, aunque de sus sentencias se deducían que estaban de acuerdo con los argumentos de la parte actora, según el cual las discriminaciones de ingreso por razón de raza si eran contrarias a la decimocuarta enmienda de la constitución de los Estados Unidos.

Es más la misma Corte suprema de justicia de los Estados Unidos para apartarse del sentencia Plessy vs. Ferguson, tuvo no solo que identificarlo sino que acudir a los conceptos de constitución viviente según los cuales los principios fundamentales como la libertad y la igualdad varían y evolucionan en el tiempo y espacio, de tal manera que argumento la Corte que no se podía entender el mismo concepto en ese momento que de la forma que se había aplicado cien años atrás.

El segundo principio establecido en cuanto al control de constitucionalidad se refiere, es el principio de necesidad de la función de control y se refiere a que la Corte Suprema De Justicia Estadounidense no puede emitir una sentencia de constitucionalidad de una ley salvo cuando dicho pronunciamiento sea imprescindible para resolver el caso jurídico que se le plantea.

Al respecto este principio a sido desarrollado por las reglas Brandeis dictadas en el caso Ashwander vs. TVA de 1936 que establecen en que casos es procedente dictar una sentencia de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos:

- “1. La Corte no tiene competencia para conocer de procesos amigables en el que no hayan adversarios, razón por la cual en Estados Unidos no puede existir un sentencia constitucional de manera abstracta sobre tratados internacionales, sino de la aplicación del tratado debe resultar un perjuicio para la persona en cuestión.
2. La Corte no decide la constitucionalidad de la ley si esto no es necesario para decidir un litigio judicial. Es decir en este caso la sentencia constitucional solo se puede dictar cuando sea estrictamente necesario para resolver el caso.
3. La Corte no formulará una regla de derecho que resulte más amplia que los hechos proporcionados por el caso. Es decir, que la Corte no puede fijar sentencia o doctrina constitucional sino en perfecta correspondencia lógica con la dimensión fáctica del caso.
4. De ser posible la Corte resolverá los casos con bases o fundamentos no constitucionales. Si el sentido común lo admite de no peligrar manifiestamente la integridad constitucional la Corte adoptara su decisión no al margen de la constitución, sino acertando los fundamentos jurídicos del caso en la ley y no en la constitución.
5. La Corte no emitirá sentencias constitucionales acerca de una ley sino se comprueba que esta es el origen del daño a la persona o a la propiedad.
6. La Corte no emitirá una sentencia constitucional acerca de una ley a instancias o a petición de quien haya aceptado los beneficios de la misma.
7. Únicamente cuando la necesidad sea notoria la Corte ascenderá a la constitución para resolver un caso a partir de la aplicación de la ley.¹³

Un último factor a tomar en cuenta es que a partir de 1953 la Corte suprema de justicia estadounidense, no solo emite sentencias constitucionales que inaplican leyes concretas, sino que también expresa sentencias interpretativas y

¹³ CORTE SUPREMA JUSTICIA NORTEAMERICANA, Ashwander Vs Tva. Citada por SANIN RESTREPO, Ricardo en Libertad y justicia constitucional, Academia Colombiana de Jurisprudencia, Bogotá, Colombia, 2004, Pág. 243

exhortativas, es decir que la Corte suprema puede no solo inaplicar la ley sino que también y en aras de guardar la seguridad jurídica puede definir el sentido de ella sin retirarla del ordenamiento jurídico y aun puede expedir exhortaciones y ordenes a los demás poderes públicos con el fin de corregir una situación fáctica que no proviene del mismo contenido de la ley sino de su aplicación indebida o la omisión de la misma.

4.10 APLICACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN EN EL CONTROL EUROPEO DE CONSTITUCIONALIDAD.

En el continente europeo, a diferencia del control norteamericano de constitucionalidad, se ejerce por lo general la figura del control abstracto y concentrado mediante el cual un tribunal especial a menudo señalado como la Corte constitucional define como punto central y no subsidiario la compatibilidad de una ley frente a la constitución del estado respectivo. Esto permite que en diversos aspectos el control de constitucionalidad europeo sea más amplio en el análisis de cuando procede a la aplicación directa de la constitución y por ende la expedición de una sentencia de constitucionalidad.

En este punto es menester decir que el primer efecto que podemos ver en el control constitucional de tipo europeo es que como no se limita este tipo de control a un caso factico específico, no se requiere un interés particular para ejercer la

debida acción de inconstitucionalidad y por ende se puede acudir a ella en situaciones abstractas.

Otra consecuencia que se deriva de lo que ya se ha visto, es que en el control de constitucionalidad de tipo europeo no se usa la aplicación de la constitución como medio subsidiario o eventual, de tal manera que no se necesita que esta sea indispensable para resolver un caso concreto, sino que debido a la abstracción de que goza el pronunciamiento de los tribunales constitucionales europeos no son necesarias circunstancias fácticas especialísimas como las que se indicaban en el control de constitucionalidad norteamericano.

Una vez dicho lo anterior, es menester señalar que los aspectos que más inciden en la aplicación del carácter normativo de la constitución en los estados europeos por parte de los tribunales constitucionales son esencialmente dos: el tipo de sentencia y los efectos en el tiempo y espacio que estas tienen frente al ordenamiento jurídico.

4.10.1 Tipos De Sentencias de Constitucionalidad en el control de constitucionalidad Europeo.

De manera general y de acuerdo a la doctrina se esbozan tres tipos de sentencias de constitucionalidad en este modelo de control constitucional, las dos primeras

clases se refieren a las clásicas concepciones Kelsenianas de sentencias de constitucionalidad y de inconstitucionalidad.

En punto de las sentencias de constitucionalidad pura y simple estas declaran de manera sencilla que la norma jurídica atacada no vulnera la constitución. Por otro lado las sentencias de inconstitucionalidad pura y simple declaran el retiro del ordenamiento jurídico de la norma atacada por encontrarse en contradicción con la constitución, esta inconstitucionalidad se predica parcialmente incluso, al punto que toda la legislación atacada no es inconstitucional sino un artículo, un inciso o un numeral de la misma.

El Tercer tipo de sentencia de constitucionalidad que constituye el atractivo académico el modelo europeo de control se refiere a las sentencias modulativas que según la doctrina actualizada son aquellas decisiones que sin ser meramente declarativas de la constitucionalidad del precepto enjuiciado tampoco proceden a declarar su inconstitucionalidad.

Este tipo de sentencias, forjan un punto intermedio entre los dos extremos que señala el control constitucional y se rigen por tres grandes principios. El principio de conservación del derecho, el principio de interpretación conforme a la constitución y el principio del derecho viviente.

El principio de conservación del derecho se refiere a la obligación del Tribunal Constitucional de que en lo posible y en aras de guardar la seguridad jurídica del estado el ordenamiento jurídico inferior a la constitución debe mantenerse obviamente siempre y cuando la contradicción entre este y el estatuto máximo no sea insalvable.

El principio de interpretación conforme a la constitución es aquel mediante el cual el Tribunal Constitucional siempre que sea necesario y posible deberá armonizar la ley con la constitución eligiendo entre una doble posibilidad interpretativa el significado que evite la contradicción entre ambas normas. El efecto de la interpretación conforme es el de conservar la validez de una ley que de otra forma debería ser declarada inconstitucional.

El principio del derecho viviente aplicado al control de constitucionalidad señala que si una ley ofrece múltiples interpretaciones y el órgano de la justicia ordinaria encargado de interpretarla le ha dado una interpretación que se aviene con los mandatos constitucionales, el Tribunal Constitucional debía limitarse a proclamar la validez de esa interpretación y a declararla interpretación conforme.

Dicho lo anterior es posible señalar que de un detenido análisis de la doctrina constitucional europea se puede hacer una clasificación de las sentencias modulativas en cuatro tipos: sentencias aditivas, sentencias interpretativas, sentencias exhortativas y sentencias manipulativas.

Para una mejor comprensión de lo anteriormente expuesto, se utilizará como ejemplos las categorías de sentencias emanadas por el Tribunal Constitucional de Alemania, la Corte constitucional italiana y el consejo constitucional Francés, ya que son estos los que han marcado paradigmas sobre los tipos de sentencias y sus efectos en materia de control de constitucionalidad.

4.10.1.1 Sentencias de constitucionalidad aditivas.

Las sentencias de constitucionalidad aditivas son aquellas mediante el cual el Tribunal Constitucional establece agregaciones a la ley señalando generalmente requisitos adicionales a los previstos por el legislador para que se produzca la constitucionalidad de la norma acusada.

Las sentencias aditivas de constitucionalidad permiten que el Tribunal Constitucional en caso de advertir vacíos u omisiones del legislador y que no se permita o que sea inconveniente el reenvío de la ley, él mismo pueda adicionar requisitos que este inicialmente no ha previsto o condiciones normativas que en un principio le eran extrañas a la ley, es de advertir que estas adiciones no cambian sustancialmente el contenido de la misma sino que por el contrario complementan el sentido de ella para evitar que una omisión del legislador derive en una inconstitucionalidad de la norma jurídica en cuestión.

En la Corte Constitucional Italiana, este tipo de sentencias son utilizadas bajo el nombre de sentencias aditivas, sentencias dentro de las cuales podemos citar a manera de ejemplo la sentencia 125 de 1988 en la cual frente a una omisión legislativa discriminatoria del legislador en cuanto solamente ordeno que se diera un subsidio de vivienda a los residentes de Roma de estratos menos favorecidos, la Corte la subsano ordenando que la suman que reciban los beneficiarios se distribuyan entre todos los que tienen el mismo derecho que ellos adicionando de esta forma la ley en su contenido normativo¹⁴. Con igual nombre se conocen en el Tribunal Constitucional español.

El consejo constitucional francés la utiliza como reserva de constitucionalidad denominada reserva de interpretación constructiva.

4.10.1.2 Sentencia de constitucionalidad interpretativa.

Las sentencias de constitucionalidad interpretativa son aquellas mediante las cuales el Tribunal Constitucional, de conformidad con el principio de interpretación conforme, al advertir que una ley puede tener multiplicidad de interpretaciones y que unas pugnan con la constitución y otras no define cual es la constitucionalmente aceptable o en su defecto define cuales se oponen al estatuto máximo. Esta practica es de uso muy frecuente en los tribunales constitucionales

¹⁴ GROPPi, Tania. Hacia Una Justicia Constitucional Ductil. Edit: Universidad de Siena. Milán, Italia, 2008, Pág 35.

de Europa en prácticamente todos se utiliza como medio para mantener válido el ordenamiento jurídico sin afectar la integridad de e la constitución, es mas en países como Suiza en el cual no existe ni siquiera la posibilidad de que el Tribunal Federal inaplique una ley federal por inconstitucionalidad existe este tipo de sentencias.

De manera particular en el Tribunal Constitucional de Alemania, este tipo de sentencias permite solo que el tribunal decida cual es la interpretación correcta de la norma jurídica inferior frente a la constitución y se denomina sentencia de compatibilidad bajo interpretación conforme.

En Francia el Consejo Constitucional tiene un margen más amplio de acción mediante la reserva de interpretación neutralizante en la cual y de acuerdo al caso propuesto puede elegir entre imponer una interpretación constitucionalmente correcta o por el contrario señalar solamente aquellas que son frontalmente inconstitucionales.

El caso más paradigmático de este tipo de sentencias en el consejo constitucional Francés es la decisión 80-127 de 1981 en la cual este órgano revisó la norma orgánica en la cual se establecía que la seguridad era un derecho fundamental y primario de todos los ciudadanos Franceses, el consejo constitucional consideró que esta norma era constitucional siempre y cuando se entendiera que su aplicación no implicaba una disminución o menoscabo de las libertades

fundamentales de los ciudadanos, bajo cualquier otra interpretación era inconstitucional¹⁵.

Por último, en la Corte Constitucional Italiana estas sentencias se desarrolla en dos tipos: la interpretativas de desestimación en la cual la Corte impone la interpretación constitucionalmente correcta y la interpretativa estimatoria en la cual la Corte en vez de imponer una interpretación univoca mas bien procede a descartar las que contrarían la constitución. Un caso paradigmático en el modelo Italiano tiene que ver con la sentencia 232 de 1998 que emitió la Corte Constitucional Italiana sobre términos procesales, indicando que estos debían aplicarse de manera favorable al accionante del proceso judicial respectivo de conformidad con los principios y valores de la constitución italiana, es decir que los artículos que regulaban los términos de prescripción y caducidad debían interpretarse bajo el concepto de que cualquier duda jurídica debía resolverse a favor del accionante, otra interpretación más restrictiva daría lugar a la inconstitucionalidad de la norma¹⁶.

4.10.1.3 Sentencia de constitucionalidad exhortativa.

En las sentencias de constitucionalidad exhortativa el Tribunal Constitucional respectivo, en vez de declarar la constitucionalidad de la norma o de adicionarla o

¹⁵ CANO BERNAL, Natalia, Op Cit. Pág 186.

¹⁶ Ibidem. Pág 200

de interpretarla unívocamente lo que hace es que declara la constitucionalidad de la misma pero ordena al legislador o a las autoridades encargadas de aplicarla la reglamentación conforme a la constitución de la misma.

Este tipo de sentencias se pueden dar en el caso en que la Corte advierta que la inconstitucionalidad de la norma acarrearía efectos perversos y que no puede suplir las carencias inconstitucionales de la norma jurídica mediante los demás instrumentos modulativos so pena de subvertirlos.

Las sentencias de constitucionalidad exhortativas, por lo general convierte al tribunal en un verdadero instructor del legislador puesto que las órdenes sobre la reglamentación de la norma son precisas y exactas en cuanto a la forma y el tiempo en el cual el legislador debe reordenar la ley. Se aplican Principalmente en Alemania mediante la figura de las sentencia de incompatibilidad y en Francia mediante la reserva de interpretación directiva en la que el consejo constitucional dirige exhortaciones al legislador.

Un caso paradigmático Francés lo encontramos en la decisión 83164 en la cual el consejo constitucional al no poder ejercer reserva de interpretación constructiva porque alteraban el texto de la ley y no había interpretación alguna que resultará acorde con la constitución y anular la ley significaba quitarles los instrumentos al estado para perseguir fiscalmente a los evasores emitió una reserva de interpretación directiva en la cual señaló al parlamento las modificaciones que

debían hacerse a la norma sobre todo en materia de defensa y debido proceso y dio un plazo de dos años para que fueran acogidas¹⁷.

En Italia no aplica este tipo de sentencia dado que la Corte constitucional italiana cuenta con mas amplio margen de acción mediante las sentencias manipulativas

4.10.1.4 Sentencias de constitucionalidad manipulativas.

Las sentencias de constitucionalidad manipulativas son propias del modelo de control constitucional Italiano, pero que ha sido exportado a otros como el español, consiste en que debido a la declaración de inconstitucionalidad de una parte del contenido normativo la Corte modifica e integra nuevamente la ley de tal manera que si bien algunos elementos de esta se mantienen incólumes en el alcance normativo, el contenido esencial difiere radicalmente del original.

Este tipo de sentencia es bastante polémica pero encuentra sustento en que la Corte Constitucional Italiana fundamenta la invasión a la orbita competencial del legislador en un principio constitucional específico y en el hecho que los elementos que se mantienen inalterados en la ley de ser retirados del ordenamiento jurídico en unidad con el resto de esta causarían efectos nocivos entre los ciudadanos.

¹⁷ Ibidem, Pág. 203.

Un caso paradigmático de este tipo de sentencias es el decidido en la sentencia rol 155 de 1996 en la que la corte constitucional Italiana revisó una norma que señalaba expresamente: “no se considerará como causal de incompatibilidad judicial el conocimiento previo de los actos materia del proceso”. En la citada sentencia se limitó a declarar inconstitucional la palabra NO, cambiando de manera radical la esencia del mismo y lo justificó con el argumento jurídico de la defensa del principio de imparcialidad judicial en los siguientes términos:

“la imparcialidad reclama que la función de juzgar sea asignada a un sujeto "tercero" no sólo en el sentido de carecer de intereses propios, sino también desprovisto de convicciones preconstituidas sobre la materia a decidir, las que pueden haberse formado en las diversas fases del juicio con ocasión de funciones decisorias que él ha debido desarrollar precedentemente. La función jurisdiccional, agrega esta corte, se caracteriza por su objetividad, lo que exige la máxima despersonalización del ente juzgador. Se trata que el juzgador pueda fallar el asunto sólo atendiendo a una racional apreciación de las pruebas aportadas al proceso, sin que se vea influenciado por valoraciones sobre el mérito precedentemente expresadas”¹⁸

4.11 EFECTOS EN EL TIEMPO Y ESPACIO DE LAS SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD EUROPEAS

En este punto y de manera general las sentencias de constitucionalidad de los tribunales europeos contienen tres factores que le son comunes a todos: el primero es que las sentencias tanto en su parte resolutoria como motiva y aun en procesos de amparo son erga omnes al punto que en la ley orgánica del Tribunal Constitucional de Alemania se dice que las sentencias sentadas por el Tribunal

¹⁸ GROPP, Tania. Op Cit. Pagina 48.

Constitucional tiene la misma fuerza normativa que una ley especial del parlamento.

Otro factor que le es característico, es que las decisiones de los tribunales constitucionales europeos se aplican solo hacia el futuro, es decir que no cobijan situaciones retroactivas al momento de emitir la sentencia de constitucionalidad.

El tercer elemento característico es que la sentencia de constitucionalidad tiene efectos inmediatos, de tal manera que con la simple publicación de la misma surte efecto y obliga a todos. Una excepción a este principio la podemos encontrar en la Corte Constitucional Italiana quien expide las nominadas sentencias con efectos diferidos en el tiempo mediante la cual posterga la obligatoriedad de su sentencia hasta una fecha definida por ella misma en la providencia que expide.

En conclusión, este modelo de control constitucional europeo muestra como independientemente del estado o del órgano encargado de la guarda de la constitución las decisiones del Tribunal Constitucional en el viejo continente encierran en si mismas un poder de creación jurídica paralelo al del legislador motivo por el cual la idea de las diferencias entre el legislador racional y los Tribunales Constitucionales como legisladores negativos se desplazan por la necesidad de respuestas concretas rápidas y efectivas que protejan los derechos vulnerados y preserven los fines y principios del Estado constitucional.

5. IMPACTOS Y RESULTADOS ESPERADOS.

Todo el referente teórico anterior invita a revisar la manera en que se ha desarrollado el Control de Constitucionalidad en Colombia a partir de la Constitución de 1991 y cual es la actividad metodológica que aplica a partir de los estándares norteamericano y europeo señalados por la Jurisdicción Constitucional.

Asimismo los resultados plausibles de la investigación de control constitucional, partiendo de los referentes teóricos planteados en este documento, necesariamente deben verse reflejados en la descripción argumental de las líneas de acción en materia de tipos de sentencias por parte del máximo tribunal constitucional colombiano, de efectos de temporales y espaciales de las decisiones de la Corte Constitucional de nuestro país, y de la actividad de la Corte que tiene su fuente originaria en los modelos de control reseñados anteriormente y aquella que en su metodología y estandarización es creación propia de este órgano jurisdiccional.

Por ultimo, un resultado esperado y lógico de la investigación documental aquí vertida es obviamente la manera en que las sentencias y la actividad de la Corte Constitucional influye sobre el accionar de los demás operadores judiciales en los casos que por naturaleza le son ordinarios y en los que actúan como integrantes

de la jurisdicción constitucional, así como la visión y opinión de estos acerca del desbordamiento o no de los límites del control constitucional por parte de la Corte Constitucional Colombiana

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

6.1. ASPECTOS MÁS SOBRESALIENTES DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE COLOMBIA.

El modelo de control constitucional en Colombia, a partir de la expedición de la carta del 91 ha tenido una estructura orgánica muy parecida a la de los Tribunales Constitucionales Europeos en el sentido de que existe un órgano central de la jurisdicción constitucional que tiene a cargo el control de constitucionalidad de las leyes de manera abstracta pero que de manera funcional permite que los jueces ordinarios entren como operadores de jurisdicción constitucional en los procesos de amparo conocidos en Colombia como de tutela, pero en todo caso correspondiendo a la Corte constitucional la unificación de la interpretación en materia de derechos fundamentales como organismo de cierre en esta materia.

En el sentido anteriormente comentado, los poderes que se atribuyen a la Corte constitucional son amplísimos en la medida en que abarcan de manera abstracta todo tipo de normas y de manera fáctica todo tipo de situaciones y circunstancias.

La Corte Constitucional Colombiana ejerce su control de manera abstracta y a las voces del artículo 241 de la constitución sobre leyes tanto por su contenido material como por vicios de procedimientos, decretos con fuerza de ley en los mismos términos anteriores, tratados internacionales aprobados después de la

vigencia de la constitución del 91, convocatorias a consultas populares, referendos, plebiscitos o asamblea nacional constituyente, solo por vicios de procedimiento en su convocatoria y actos reformativos de la constitución por vicios de procedimiento.

Adicionalmente, la Corte mediante creaciones jurisprudenciales ha entendido que puede ejercer control sobre los actos reformativos de la constitución en su contenido material mediante el denominado vicio de competencia en el cual se pretende que el constituyente derivado, es decir el congreso de la república no puede remplazar un elemento definitorio de la constitución por otro radicalmente distinto o eliminarlo porque de lo contrario estaría sustituyendo la constitución y no reformándola.

De otro lado, la Corte también ha dicho que el juicio de inconstitucionalidad puede versar sobre interpretaciones jurídicas de las altas Cortes sobre una norma para decidir si esta interpretación es o no concordante con los postulados de la constitución, en ese sentido el auto 161 de 2004 expreso: “si bien es cierto que la interpretación judicial de una norma de rango legal pudiera resultar contraria a la constitución en cuyo caso si la norma se demanda puede la Corte en ejercicio de su función de guardiana de la integridad y supremacía de la carta política expulsar del ordenamiento jurídico la interpretación que riña con la carta”.¹⁹

¹⁹ CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Auto161 de 2004, Sala Plena, M.P: Alfredo Beltrán Sierra.

La Corte constitucional colombiana también tiene poderes de control en cuanto ya no a juicios abstractos de control de una ley sino en cuanto a hechos facticos presentados en una acción de tutela. En ese sentido la Corte constitucional mediante sus fallos de tutela ha creado la denominada doctrina constitucional integradora mediante la cual puede fijar el alcance, composición y esencia de los derechos fundamentales incluso respecto de una norma jurídica en su aplicación, lo que quiere decir que a través de este concepto la Corte constitucional a fijado cuales derechos se consideran fundamentales y si son amparables, como debe aplicarse una norma jurídica completa para que no afecte los derechos fundamentales e incluso cual derecho fundamental debe ponderarse por encima del otro en determinados casos.

Visto de esta manera, es razonable señalar que la Corte constitucional colombiana mediante sus sentencias constitucionales posee un amplio margen de apreciación y alcance que exceda incluso las sentencias de constitucionalidad europeas que ya se han comentado.

6.2 TIPOS DE SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD EN EL CONTROL CONSTITUCIONAL COLOMBIANO

De manera similar a como ocurre en el control constitucional Europeo, en el control constitucional colombiano también existen distintos tipos de sentencias en

diferentes sentidos que configuran el conjunto de la doctrina constitucional en Colombia.

No obstante lo anterior, es menester decir que la Corte Constitucional Colombiana debido a la amplitud de que goza su apreciación y el largo alcance que tienen sus poderes, muy superiores a los de los tribunales europeos ha sido más creativa en cuanto al desarrollo de los tipos de sentencias de constitucionalidad y en tal sentido no solo ha tomado como fuente los tipos de sentencias que se expiden en Europa o en Norteamérica, sino que de manera progresiva ha ido creando un conjunto de tipos de decisión propios que han ido configurando su actividad judicial. En este punto es importante decir que la Corte constitucional colombiana en sus 19 años de actividad ha ido ampliando de manera rápida pero progresiva los alcances de su doctrina.

Debido a la amplitud de los tipos de sentencias de constitucionalidad que posee la doctrina de la Corte Constitucional Colombiana se reseñará de manera separada los sentencias que declaran la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma de los sentencias modulativas de control.

6.2.1 Sentencias de constitucionalidad e inconstitucionalidad en la Corte constitucional Colombiana.

Existen cinco clases de orientaciones en este tipo de decisiones que son:

- Sentencia de constitucionalidad simple: esta corresponde precisamente a aquella en la cual la Corte estudia el contenido de la norma atacada y lo compara con la integridad del texto constitucional no encontrando contradicción entre el texto constitucional y la norma inferior. La principal característica de este tipo de decisión es que al hacer transito a cosa juzgada absoluta constitucional la norma legal que ha sido objeto del juicio de constitucionalidad no puede ser objeto de un nuevo debate, con la salvedad de inconstitucionalidad sobreviviente.
- Sentencia de constitucionalidad relativa: este tipo de sentencia se caracteriza por el hecho de que la norma en cuestión puede someterse a un nuevo examen de constitucionalidad luego que ya se ha hecho un juicio sobre ella. En este punto la Corte Constitucional ha admitido tres vías mediante las cuales se puede llegar a este punto: la cosa juzgada relativa explícita, la cosa juzgada relativa implícita y la cosa juzgada aparente.

Las dos primeras han sido reseñadas en distintas sentencias de la Corte constitucional y para tales efectos el auto 031B del 2002 ha señalado el concepto de cosa juzgada relativa explícita y lo ha establecido de la siguiente forma:

”De manera excepcional la Corte constitucional al fijar el alcance de sus decisiones y con el propósito de preservar el conjunto de garantías que hacen parte de nuestro sistema de control de constitucionalidad puede optar por limitar el alcance de la cosa juzgada de manera que esta no sea absoluta sino relativa a los cargos analizados en la sentencia.- de lo anterior se colige que la Corte en ejercicio de sus funciones tiene la posibilidad de atenuar el carácter absoluto de la cosa juzgada restringiendo el fallo de constitucionalidad a la confrontación de la disposición demandada con algunas y no todas las disposiciones

constitucionales, de esta manera la Corte confiere una inmunidad parcial al dispositivo sub examine permitiendo la interposición de nueva demandas por cargos diferentes a los que han hecho transito a la cosa juzgada absoluta ... por regla general la limitación de la cosa juzgada debe constar en la parte resolutive de la sentencia”.²⁰

No obstante lo anterior la Corte también ha admitido que es posible que la relatividad de la cosa juzgada no se encuentre en la parte resolutive sino que este en las motivaciones de la sentencia y en este punto nos encontramos con la figura de la cosa juzgada relativa implícita definida por el mismo auto reseñado de la siguiente forma:

“Sin embargo con la denominación de cosa juzgada relativa IMPLÍCITA se ha admitido que no obstante que ello no ocurra así se presenta el fenómeno de la cosa juzgada constitucional relativa cuando así se ha expresado en la parte motiva de la providencia. Es necesario precisar que el carácter de implícito deviene ha que no ha existido un pronunciamiento sobre la materia en la parte resolutive, pero que de ello no deriva la posibilidad de que en cada caso se pretenda la existencia de cosa juzgada apenas relativa a partir de la consideración de los cargos o los argumentos que se han hecho expresos por la Corte. Para que exista cosa juzgada relativa, se requiere en todo caso, que tal limitación se halla establecido de manera expresa por la Corte, así sea solo en la parte considerativa, caso en el cual, se repite, recibe la denominación de implícita”.²¹

Otro caso bien distinto a los anteriores tiene que ver con la cosa juzgada aparente en la cual la Corte ha admitido que es posible volver a hacer el estudio de constitucionalidad por cualquier cargo cuando ocurre cierta situación que como tal ha sido reseñada de manera amplia en la sentencia C-925 del 2000:

“En cambio cuando esta corporación ha desarrollada el concepto de la cosa juzgada aparente ha querido referirse a situaciones en las cuales en realidad la norma de que se trata no fue objeto de examen de constitucionalidad alguno aunque parezca que lo halla sido, como cuando en la parte resolutive de la sentencia se declara exequible un artículo

²⁰ CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, Auto 031B de 2002, Sala Plena, M.P: Alfredo Beltrán Sierra

²¹ Ibídem, Pág. 64.

sobre cuyo contenido nada se expreso en los considerandos y por lo tanto no se produjo en realidad cotejo ni absoluto o exhaustivo ni relativo ni parcial. Simplemente en tales ocasiones lo único que encuentra el juez de constitucionalidad es la apariencia de haber resultado antes sobre la norma que ante él se demanda sin haberse llevado en efecto el juicio correspondiente. De lo cual surge por aplicación del artículo 228 de la constitución (prevalencia del derecho sustancial) y por el sentido mismo de un verdadero control de constitucionalidad el necesario reconocimiento de que en vez de cosa juzgada hay cosa no juzgada y la consecuente declaración de que la Corte puede entrar en el fondo para dictaminar si el precepto correspondiente se ajusta o no a la carta política sin violar por ello el principio consagrado en su artículo 243".²²

Por ultimo la Corte ha admitido en la sentencia C 211 del 2003 que aspectos facticos y no jurídicos pueden relativizar la cosa juzgada incluso la absoluta pudiendo el juez constitucional volver a hacer el examen de una norma aun cuando la constitucionalidad de la misma no se ha relativizado ni siquiera en la parte motiva²³.

- Sentencia de Inconstitucionalidad Simple: este tipo de sentencias es precisamente la ideada por Kelsen mediante el cual al demandar la totalidad de la ley y encontrarlo en contradicción con algún mandato de la carta política esta se retira del ordenamiento jurídico y por ende se entiende que ha perdido eficacia, validez y aplicabilidad. La principal característica de esta sentencia viene determinada por la misma carta política que prohíbe que una vez retirado el texto legal no puede ser reproducido en otra norma por una autoridad del estado mientras subsistan las causas constitucionales que dieron lugar a su inexecuibilidad.

²² CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, Sentencia C-925 de 2000, Sala Plena, M.P: José Gregorio Hernández Galindo

²³ Corte Constitucional, Sentencia C-211 de 2003, Sala Plena, M.P: Clara Inés Vargas Hernández

- Sentencia de inconstitucionalidad diferida: en este caso la Corte permite un tipo de inconstitucionalidad que se prolongue durante un tiempo debido a los dañinos efectos que tendría si se aplicara inmediatamente; es decir, que la Corte constitucional si bien declara la contradicción entre una norma legal y la constitución so pesa las consecuencias fácticas y jurídicas que de ella se derivarían determinando que la inexequibilidad inmediata de la ley produciría un mayor perjuicio y por lo tanto opta por dar al legislador un tiempo para que este a través de su potestad corrija la situación.

La sentencia C-221 del 1997 explica la justificación de este tipo de sentencia:

“con esta decisión, de carácter meramente temporal se otorga al congreso la posibilidad de que en ejercicio de su libertad de configuración política y dentro del plazo necesario pueda expedir la norma que corrija las deficiencias constitucionales verificadas en el artículo demandado... el carácter abierto de las normas constitucionales pero su indudable fuerza normativa tiene como consecuencia metodológica que el Tribunal Constitucional pueda recurrir a distintos tipos de decisiones. Así a veces el tribunal puede constatar que una disposición legales contraria a la carta por lo cual no puede declararla constitucional sin matiz; sin embargo una ponderación los principios anteriormente mencionados , puede llevar al juez constitución a la convicción de que la expulsión pura y simple de esa disposición del ordenamiento puede conducir a una situación legal que es peor desde el punto de vista de los valores constitucionales, ya sea por los vacíos que se puedan generar, ya sea porque la propia decisión del juez constitucional vulnera la libertad de configuración del congreso. Se explica así la aparente paradoja de que la Corte constate la inconstitucionalidad material de una norma pero decida mantener su vigencia ya que en estos caso resulta todavía mas inconstitucional la expulsión de la disposición acusada del ordenamiento por los graves efectos que ella acarrea sobre otros principios constitucionales”.²⁴

- Sentencia de inconstitucionalidad parcial: Este sentencia se caracteriza porque ya no declara inconstitucional un texto legal en su integridad sino

²⁴ CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, Sentencia C-221 de 1997, Sala Plena, M.P: Alejandro Martínez Caballero.

expresiones que se encuentran en él. En estas circunstancias la Corte retira del ordenamiento jurídico solo frases o palabras que se encuentran en determinado artículo por considerar que son estas las que le dan orientación inconstitucional al mismo. En ese sentido este tipo de sentencias a menudo las ha usado la Corte de la misma forma que ha hecho su par italiana con las sentencias manipulativas, es decir que al retirar las expresiones del artículo mencionado le ha cambiado la esencialidad de él mismo y le ha hecho decir algo radicalmente distinto de lo que venía expresando.

Un caso paradigmático que se podía mencionar, se refiere al de la sentencia C-037 del 1996 que revisó la ley estatutaria de la administración de justicia en la cual se encontraba la siguiente disposición normativa:

“las sentencias de la Corte constitucional dictadas como el resultado del examen de normas legales ya sea por vía de acción de revisión previa o con motivo del control automático de constitucionalidad solo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutive. La parte motiva constituirá criterio auxiliar para la actividad judicial y la aplicación de las normas del derecho en general. Solo la interpretación que por vía de autoridad hace el congreso de la república tiene carácter obligatorio general”.²⁵

En este punto la Corte declaró inexecutable en vez de la totalidad del artículo, únicamente las expresiones sólo y congreso de la república para dar lugar entonces a un sentido normativo en el cual no solo reivindicaba que la interpretación que ella hace tiene carácter obligatorio sino que excluía al mismo congreso de la interpretación de las normas constitucionales. Así pues si bien no ocurre en todos los casos lo más frecuente es que estas sentencias de

²⁵ CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, Sala Plena, Sentencia C-037 de 1996, M.P: Vladimiro Naranjo Mesa

inconstitucionalidad parcial sirva para que la Corte rehaga el sentido normativo de una disposición legislativa y la acomode con poderes muy similares al del legislador ordinario, caso muy parecido al de las sentencias manipulativas italianas

6.2.2 Sentencias modulativas de la Corte constitucional Colombiana.

La Corte Constitucional Colombiana, al igual que los Tribunales Constitucionales Europeos, a reconocido que en el desarrollo de su actividad judicial, también aplican los principios de Interpretación conforme a la Constitución y conservación del Derecho, a través de los cuales permite que en algunos casos una norma no sea retirada del ordenamiento jurídico, pero que su aplicación no sea contradictoria con los principios, mandatos y postulados constitucionales. En ese sentido ha tomado de la doctrina constitucional europea el concepto de Sentencias Modulativas, mediante las cuales permite mantener la inmunidad de la Constitución frente a normas inferiores pero a la vez conservar el ordenamiento jurídico legal.

No obstante lo anterior, también es necesario decir que la Corte Constitucional Colombiana ha hecho aun mas extensivos los tipos de sentencias modulativas frente a lo que hacen sus pares europeas, de modo que en su desarrollo ha admitido cuatro clases de sentencias modulativas, pero de un alcance aun mayor que los que se le adjudican en el continente europeo.

En ese sentido, la Corte Constitucional Colombiana reconoce: Las Sentencias de Interpretación Condicionada, Las Sentencias de Constitucionalidad Integradora, Las Sentencias Constitucionales de Interpretación de Derechos Fundamentales y las Sentencias Declarativas de Estado de cosas Inconstitucional.

6.2.3 Sentencia de interpretación condicionada constitucional.

La sentencia de Interpretación Condicionada Constitucional es aquella que de manera similar a lo que ocurre en Europa, y de conformidad con el principio de Interpretación Conforme a la Constitución, la Corte no retira del ordenamiento jurídico la norma o la expresión atacada, sino que condiciona la aplicación de la misma a determinada interpretación que considera es la que se ajusta a la Carta Política.

En este punto, la Corte se diferencia de sus pares europeas en que no es frecuente que ella defina cuáles son las interpretaciones no conformes con la Constitución, sino que por el contrario, en la más de las ocasiones la Corte define una sola interpretación que considera adecuada al texto del Estatuto Máximo.

La Corte ha avanzado tanto en este tipo de sentencia que aun ha admitido que la norma legal pueda ser atacada debido a la interpretación que de ella ha hecho la Alta Corte Ordinaria encargada de interpretarla (Corte Suprema de Justicia o Consejo de Estado); así la Corte mediante sentencia de constitucionalidad

removió del ordenamiento jurídico la interpretación que había hecho el Consejo de Estado de la procedencia de la demanda de nulidad simple de un acto administrativo de carácter particular, de acuerdo a la doctrina de los móviles y las finalidades.²⁶

Otro punto de alcance amplio en el que la Corte a avanzado en este tipo precedencial se refiere al hecho que ella a admitido que puede interpretar con autoridad el Contenido de una ley oscura o ambigua para definir en ella una Interpretación que se adecue a la Carta Política. Así en la Sentencia C-820 de 2006, la Corte señaló:

“Con base en lo expuesto, para la Sala es claro que, además del legislador, la Corte Constitucional también interpreta la ley para fijar el sentido de una ley oscura, de manera general y obligatoria. “Sin embargo, ello no significa que la Corte Constitucional asume la posición de órgano legislativo, pues simplemente se limita a cumplir con su función jurídica de salvaguarda de la integridad y supremacía de la Constitución (artículo 241 superior). En efecto, a diferencia de la labor legislativa, cuyo origen es la conveniencia y libertad de configuración política, la labor de esta Corporación surge del proceso judicial y de la aplicación de normas jurídicas que resultan obligatorias y vinculantes para todas las autoridades, inclusive, obviamente, para la propia Corte. Entonces, mientras el fundamento de la decisión legislativa es la conveniencia y la oportunidad política, el de la decisión judicial es el proceso y la norma jurídica que impone su cumplimiento en forma preferente y obligatoria... En tal virtud, esa omisión relativa autoriza a la Corte para que integre la norma y declare la exequibilidad condicionada de esa disposición, en el sentido de entender que la interpretación constitucional que de la ley oscura hace la Corte Constitucional, tiene carácter obligatorio y general.”²⁷

Ahora bien, es necesario reseñar las reglas jurisprudenciales que guían la aplicación de este tipo de sentencia. La Corte Constitucional Colombiana ha

²⁶ Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-426 de 2002, M.P.: Rodrigo Escobar Gil

²⁷ CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, Sala Plena, Sentencia C-820 de 2006, M.P: Marco Gerardo Monroy Cabra

admitido en sentencia C 820 del 2.006 que debe hacer en cada caso y cuando es procedente aplicar una sentencia constitucional de interpretación condicionada:

“Los siguientes son algunos de los criterios que ha utilizado la Corte Constitucional para determinar cuando es procedente el condicionamiento de una disposición sometida a control: la Corte recurre a la utilización de una sentencia interpretativa en los siguientes casos:

I) Si una disposición legal está sujeta a diversas interpretaciones por los operadores jurídicos pero todas ellas se adecuan a la Carta, debe la Corte limitarse a establecer la exequibilidad de la disposición controlada sin que pueda establecer, con fuerza de cosa juzgada constitucional, el sentido de la disposición legal, ya que tal tarea corresponde a los jueces ordinarios.

II) Si todas las interpretaciones de la disposición legal acusada desconocen la Constitución, entonces debe la Corte simplemente retirar la norma del ordenamiento jurídico. En este caso, el objeto de la sentencia sería la disposición, porque todos sus significados son inconstitucionales.

III) Si la disposición legal admite varias interpretaciones, de las cuales algunas violan la Carta pero otras se adecuan a ella, entonces corresponde a la Corte proferir una constitucionalidad condicionada o sentencia interpretativa que establezca cuáles sentidos de la disposición acusada se mantienen dentro del ordenamiento jurídico y cuáles no son legítimos constitucionalmente. En este caso, la Corte analiza la disposición acusada como una proposición normativa compleja que está integrada por otras proposiciones normativas simples, de las cuáles algunas, individualmente, no son admisibles, por lo cual ellas son retiradas del ordenamiento.”²⁸

Por último, es necesario decir que una modalidad con matices diferentes de este tipo de sentencias se produce cuando la Corte aplica la Doctrina del Derecho Viviente, según la cual cuando una norma es susceptible de distintas interpretaciones, pero la que se ha aplicado por la Alta Corte ordinaria encargada de Interpretar la norma, tiene una orientación conforme con la Constitución, la Corte se limita a validar esta interpretación y a declararla interpretación conforme y

²⁸ CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, Sala Plena, Sentencia C-820 de 2006, M.P: Humberto Sierra Porto

darle alcance obligatorio general. En este punto la Corte ha señalado en la sentencia C 820 del 2.006:

“La labor de establecer los diversos contenidos normativos que se desprenden del inciso primero del artículo 86 del C. C A., en principio, no es una tarea que incumba al juez constitucional sino al órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, el Consejo de Estado, autoridad judicial encargada de unificar la jurisprudencia en la materia, y de fijar el sentido y el alcance de los textos legales que le corresponde interpretar y aplicar. Por esa razón, ante la acusación formulada en la demanda que una de las interpretaciones posibles del precepto impugnado resulta contraria a la Constitución, cobra relevancia la doctrina del llamado “derecho viviente” , acogida por esta Corporación en numerosas decisiones, de conformidad con la cual cuando un texto legal sea objeto de diversas interpretaciones, y alguna de ellas resulte cuestionada por su aparente oposición a los mandatos constitucionales, para los efectos de establecer su verdadero alcance y su sentido racional y lógico -a la luz de los acontecimientos y transformaciones sociales-, debe tenerse en cuenta la interpretación que de la misma hayan hecho la jurisprudencia y la doctrina especializada. Según este Tribunal, en la medida en que la referida interpretación jurisprudencial y doctrinal configure “una orientación dominante bien establecida”, surge para el juez constitucional el deber jurídico de asumirla como criterio válido de la regla de derecho que se extrae del texto legal cuestionado, a menos que la misma resulte arbitraria e irrazonable y del todo incompatible con la Carta Política”.²⁹

6.2.4 Sentencia de constitucionalidad integradora.

Es aquella que se produce cuando la Corte proyecta directamente los mandatos constitucionales a la norma jurídica atacada y en tal sentido adiciona la norma legal con nuevos contenidos precisados por ella misma en la sentencia.

Este tipo de sentencia que se asemeja mucho con las sentencias aditivas de la Corte Constitucional Italiana o con las reservas de interpretación constructiva del Consejo Constitucional Francés, permite que bajo el principio del carácter normativo directo de la Constitución la Corte aplique directamente los postulados

²⁹ Ibídem, Pág. 66.

del texto constitucional y en tal sentido adicione la norma adecuándola de esta forma al texto del Estatuto Máximo.

La Corte Constitucional Colombiana ha defendido desde temprana jurisprudencia la necesidad y su competencia para emitir este tipo de sentencias en el orden constitucional colombiano. En ese sentido el Alto Tribunal en sentencia C-109 de 1995 consideró:

“La sentencia integradora es una modalidad de decisión por medio de la cual, el juez constitucional, en virtud del valor normativo de la Carta (CP art. 4), proyecta los mandatos constitucionales en la legislación ordinaria, para de esa manera integrar aparentes vacíos normativos o hacer frente a las inevitables indeterminaciones del orden legal. En ello reside la función integradora de la doctrina constitucional, cuya obligatoriedad, como fuente de derecho, ya ha sido reconocida por esta Corporación. Y no podía ser de otra forma, porque la Constitución no es un simple sistema de fuentes sino que es en sí misma una norma jurídica, y no cualquier norma, sino la norma suprema (CP art. 4), por lo cual sus mandatos irradian y condicionan la validez de todo el ordenamiento jurídico.”³⁰
La Corte en la citada sentencia señaló los fundamentos jurídico-constitucionales que permitían la expedición de este tipo de sentencias.

En ese sentido, consideró primeramente que las sentencias integradoras encuentran su primer fundamento en el carácter normativo de la Constitución, puesto que el juez constitucional, con el fin de asegurar la integridad y la supremacía de la Carta, debe incorporar en el orden legal los mandatos constitucionales.

³⁰ CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, Sala Plena, Sentencia C-109 de 1995, M.P: Alejandro Martínez Caballero

Otro de los fundamentos constitucionales para admitir este tipo de sentencias lo encontró en el principio de efectividad establecido por el artículo 2º de la Carta, puesto que los órganos del Estado en general, y los jueces y la Corte Constitucional en particular, deben buscar, en sus actuaciones, hacer realidad los principios, derechos y deberes constitucionales así como el orden de valores que la Constitución aspira a instaurar.

Por último, la Corte consideró que este tipo de sentencias se adscribía a la función que le había sido encomendada toda vez que muchas ocasiones una sentencia de simple exequibilidad o inexecuibilidad resulta insuficiente, ya que ella podría generar vacíos legales que podrían hacer totalmente inócua la decisión de la Corte. En tales casos, la única alternativa para que la Corte cumpla adecuadamente su función constitucional es que, con fundamento en las normas constitucionales, ella profiera una sentencia que integre el ordenamiento legal a fin de crear las condiciones para que la decisión sea eficaz.³¹

La Corte ha admitido dos circunstancias en las cuales es posible expedir una sentencia de constitucionalidad integradora. La primera circunstancia es cuando existe un vacío normativo en la legislación y este vacío genera una inconstitucionalidad evidente. Sin embargo, a aclarado la Corte que no todos estos omisiones del legislador pueden conducir a este tipo de sentencia, si la omisión es absoluta como en el caso de que el legislador no ha querido o no a

³¹ Ibídem, Pág.68

podido legislar en manera alguna sobre la materia, de tal forma que lo que se a evidenciado es su voluntad de no expedir normativas, en estos casos la Corte se inhibe de proferir sentencia alguno.

En aquellas ocasiones en que el legislador ha intentado regular la materia en cuestión, pero su legislación ha resultado insuficiente pues no ha contemplado todos las variables que debía haber definido en la norma, en este caso la omisión es relativa y puede entrar la Corte a suplir el vacío involuntario del legislador, adicionándole el mandato correspondiente de acuerdo a lo que dispone la Constitución. En se sentido la Corte Constitucional ha declarado en la sentencia C-208 de 2007:

“Para precisar cuales son las opciones aplicables al propósito de reparar una omisión legislativa contraria a la Constitución, la Corte sostiene que es preciso tener en cuenta que, como quiera que en tales hipótesis la inconstitucionalidad no radica en los contenidos normativos que cuentan con base textual expresa, sino en un significado implícito que surte efectos violatorios de la Carta, la depuración del ordenamiento no se logra mediante el decreto de la inexequibilidad de las disposiciones de la cuales se predica la omisión y que lo conducente es neutralizar el comentado efecto de la omisión legislativa que riñe con la Constitución y en su lugar incorporar un significado que sea acorde con los dictados superiores... Cuando esa solución no es posible, porque la omisión no se desprende de la exclusión de algunos sujetos en circunstancias en las cuales cabía predicar el imperativo constitucional de una identidad de régimen jurídico, se ha planteado la alternativa de una sentencia integradora que permita mantener la disposición enjuiciada en el ordenamiento y superar la inconstitucionalidad derivada de la omisión “... desplazando la lectura afectada de invalidez mediante la proyección, sobre el precepto inferior, de los contenidos de la Carta que, en esas circunstancias, brinda una solución constitucionalmente adecuada, precisa e indudable” ³².

³² CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA Sala Plena, Sentencia C-208 de 2007, M.P: Rodrigo Escobar Gil

No obstante lo anterior, la Corte en la misma sentencia consideró que cuando no existe un mandato de la propia Carta aplicable a la norma cuya omisión legislativa resulta en un vacío constitucional, en estos casos la sentencia integradora no aplica.

La segunda circunstancia en la cual la Corte puede acudir a una sentencia integradora se da cuando existe una regulación del congreso de la república que de retirarse del ordenamiento jurídico pura y simplemente generaría un vacío constitucional mas grave. En estos casos la Corte puede optar entre una sentencia de inexecuibilidad diferida o cuando la constitución establece mandatos al respecto acude a una sentencia integradora.

En ese sentido, un caso paradigmático es el de la sentencia C 112 del 2000 en la cual la Corte realizo el juicio de constitucionalidad frente a la expresión que designaba como juez o notario competente al del domicilio de la mujer, la Corte constato que esto atentaba contra el principio de igualdad constitucional, pero que si lo retiraba seria aun mas perjudicial para el ordenamiento jurídico pues no se establecería un juez o notario competente para realizar el contrato matrimonial. En la ya citada sentencia la Corte estableció primero que en estos casos:

“ puede también la Corte llenar ella misma el vacío legal que produce la declaración de inexecuibilidad de la disposición acusada por medio de una modalidad de sentencia integradora pues el vacío de regulación es llenado por medio de un nuevo mandato que la sentencia integra la sistema jurídico, proyectando directamente los mandatos constitucionales en el ordenamiento legal... ahora bien con tales criterios es claro que en este caso procede una sentencia integradora por cuanto la Corte ha concluido que la ley puede válidamente establecer que es competente el juez del lugar de residencia de los

contrayentes, pero que es inconstitucional proferir el domicilio de la mujer. Por ende esta corporación debe declarar la exequibilidad del mandato relativo al domicilio de los contrayentes, pero la inconstitucionalidad de la referencia exclusiva al lugar de residencia de la mujer. En tal contexto el vacío normativo resultante solo pueda ser llenado de una forma y es la siguiente en virtud del principio de igualdad entre los sexos debe entenderse que el funcionario competente para celebrar el matrimonio es el juez municipal o promiscuo de la vecindad de cualquiera de los contrayentes a prevención”³³

6.2.5 Estado de cosas inconstitucional.

El estado de cosas inconstitucional es uno de los tipos de sentencias mas creativos y propios de la jurisdicción Colombiana reciente y es por ello que se convierte en uno de las más atractivas a análisis de estudio, en este sentido la Corte utilizando la revisión de las sentencias de tutela declara la inconstitucionalidad no de una norma legal es mas ni siquiera de una omisión legislativa y tampoco de una situación particular sino que por el contrario señala la inconstitucionalidad de una situación fáctica general que afecta una parte de la población colombiana.

En esta orientación, la sentencia SU-090 de 2000 establece que se esta ante un estado de cosas inconstitucional cuando se presenta una violación de derechos fundamentales de muchas personas - que pueden entonces recurrir a la acción de tutela para obtener la defensa de sus derechos y colmar así los despachos judiciales - y cuando la causa de esa vulneración no es imputable

³³ CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, Sala Plena, Sentencia C-112 de 2000, M.P: Alejandro Martínez Caballero.

únicamente a la autoridad demandada, sino que reposa en factores estructurales.³⁴

La característica fundamental de este tipo de sentencia tiene que ver con que son sentencias exhortativas por naturaleza pero van mas allá al punto de exigir y ordenar plazos concretos y circunstancias mediante las cuales se debe superar el estado de cosas inconstitucional.

El estado de cosas inconstitucional a medida que ha sido declarada más o menos en unas ocho ocasiones ha tenido una evolución jurisprudencial bastante amplia hasta el punto que hoy tiene una construcción jurisprudencial que permite definir su alcance, sus condiciones de procedibilidad y los objetivos que persigue.

La sentencia T 025 del 2004 que declaro el estado de cosa inconstitucional en la población desplazada permite realizar una compilación de la doctrina constitucional sobre este tipo de sentencia.

En la sentencia referida se expresa claramente que los factores valorados para definir si existe un estado de cosa inconstitucional son los siguientes:

³⁴ CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, Sala Plena, Sentencia SU – 090 de 2000, M.P: Eduardo Cifuentes Muñoz.

“1. la vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas.

2. La prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar sus derechos, la adopción de practicas inconstitucionales como la incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado, la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesaria para evitar la vulneración de derechos, la existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades requiriendo al adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones que exige un nivel de recursos demandantes de un esfuerzo presupuestal adicional importante.

3. Que todas las personas afectadas por el mismo problema si acudieran a la acción de tutela para proteger la vulneración de sus derechos causarían una gran congestión del aparato judicial colombiano.”³⁵

En la misma sentencia, la Corte Constitucional Colombiana amplió los poderes del estado de cosas inconstitucional ya que la Corte no solo adoptó órdenes dirigidas alas entidades para superar el estado de cosa inconstitucional sino que conservó la competencia para constatar que está fuera cumplido y el estado de cosas inconstitucional fuera superado.

La Corte cuando declara un estado de cosas inconstitucional permite que si bien no hayan decisiones a muy corto plazo de las autoridades del Estado también es cierto que la declaración formal del estado de cosas inconstitucional tiene como consecuencia que las autoridades nacionales y territoriales encargadas de atender a la población afectada deben ajustar sus actuaciones de tal manera que se logre concordancia entra las ordenes emitidas para cumplir los mandatos constitucionales y legales y los recursos asignados para asegurar el goce efectivo

³⁵ CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-025 de 2004, M.P.: Manuel José Cepeda

de los derechos de la población reseñada pudiendo la Corte revisar y calificar si las acciones de los entes del estado se dirigen o no a la superación del estado de cosa inconstitucional incluyendo en esta función la posibilidad de establecer plazos y cronogramas para ir superando gradualmente ese estado.³⁶

De esta forma, se pueden resumir las características principales de este tipo de sentencias así: Primero que constituye un tipo de sentencias sui generis que tiene como causa no una norma abstracta sino una situación fáctica que afecta a determinada parte de la población; Segundo que permite que la Corte a través de esta figura en una sola sentencia determine órdenes y exhortaciones dirigidas a superar ese estado de cosas inconstitucional; Tercero que la misma Corte puede conservar la competencia para vigilar el efecto del sentencia y las ordenes sentadas por este, y por ultimo que cualquier persona de la población a quien se dirige el sentencia, así no haya participado de la solicitud de tutela puede exigir el cumplimiento de las ordenes emitidas por la Corte en la sentencia.

6.2.6 Sentencia interpretativa de derechos constitucionales.

Este ultimo tipo de decisión desarrollada por la Corte Constitucional, se refiere directamente a las denominadas: “Sentencias de Revisión de Tutela”, mediante las cuales la Corte como órgano de cierre de interpretación de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución del 91, puede definir para un caso

³⁶ Ibídem, Pág. 80

concreto y con la autoridad de un precedente obligatorio, en calidad de doctrina constitucional, como debe entenderse y aplicarse la garantía de los derechos en la sociedad colombiana, o mas exactamente como lo define ella misma: “una única regla de derecho reiterada de manera uniforme”³⁷.

De lo anterior se puede observar que la Corte Constitucional a través de este tipo de sentencias guarda un poder de discreción bastante amplio, mediante el cual puede fijar con autoridad criterios que permiten la aplicación directa e inmediata de los derechos en casos con circunstancias similares.

La Sentencia C- 037 de 1996, precisa el alcance de esta doctrina constitucional en materia de fallos de tutela:

“Por lo demás, cabe puntualizar que las sentencias judiciales a través de las cuales se deciden acciones de tutela, sólo tienen efectos en relación con las partes que intervienen en el proceso (Decreto 2591/91, art. 36). Sin embargo, la doctrina constitucional que define el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sentada por la Corte Constitucional, con ocasión de la revisión de los fallos de tutela, trasciende las situaciones concretas que le sirven de base y se convierte en pauta que unifica y orienta la interpretación de la Constitución. El principio de independencia judicial, tiene que armonizarse con el principio de igualdad en la aplicación del derecho, pues, de lo contrario, se corre el riesgo de incurrir en arbitrariedad. La jurisprudencia de los altos órganos jurisdiccionales, por medio de la unificación doctrinal, persigue la realización del principio de igualdad. Por consiguiente, sin perjuicio de lo observado respecto de la doctrina constitucional, la exequibilidad del segundo numeral del artículo 48, materia de examen, se declarará bajo el entendido de que las sentencias de revisión de la Corte Constitucional, en las que se precise el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sirven como criterio auxiliar de la actividad de los jueces, pero si éstos deciden apartarse de la línea jurisprudencial trazada en ellas, deberán justificar de manera suficiente y adecuada el motivo que les lleva a hacerlo, so pena de infringir el principio de igualdad”³⁸

³⁷ Corte Constitucional, Sala Plena, Auto 223 de 2006, M.P: Jaime Córdova Triviño

³⁸ CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, Sala Plena, Sentencia C-037 de 1996, M.P: Vladimiro Naranjo Mesa.

A partir de esta sentencia se ha ido evolucionando en este concepto, que a permitido desarrollar criterios que permiten identificar cuando se está frente a una regla de derecho establecida por la Corte mediante este tipo de sentencias.

El Auto 223 de 2006 elabora una compilación de los elementos que a desarrollado la Corte para admitir que en determinado caso ya hay regla de derecho sobre precisión y alcance de los derechos fundamentales: Primero, Que exista una ratio decidendi (razones fundamentales derecho que guardan unidad con la decisión del caso) que haya servido de base para solucionar un problema jurídico o una cuestión constitucional; Segundo que en dicha ratio decidendi se encuentre una regla de derecho relacionada con un caso a resolver posteriormente y Tercero que los hechos del caso de la sentencia precedencial deben ser semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse posteriormente. Estos tres elementos hacen que una sentencia anterior sea vinculante y en esa medida se constituya en una sentencia aplicable al caso concreto.³⁹

Este tipo de sentencias, polémica por demás debido a que es la que más a causado fricciones con las otras altas cortes, debido a que de ella se deriva el concepto de vía de hecho o como hoy se le denomina condición de procedibilidad de una sentencia judicial, permite que la Corte Constitucional se adentre en todos los campos donde un derecho fundamental se encuentre en juego, y es por ello

³⁹ CORTE CONSTITUCIONL COLOMBIANA, Sala Plena, Auto 223 de 2006, M.P: Jaime Córdova Triviño

que prácticamente invade todas las materias jurídicas y aun fácticas en las cuales se desenvuelven los ciudadanos y particularmente los operadores jurídicos y administrativos

6.3 CARÁCTER VINCULANTE Y EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA.

Las normas legales que han definido los alcances de la Corte constitucional no habían dejado mucho margen a la obligatoriedad de las decisiones de la Corte, en ese sentido tanto el decreto 2067 de 1991 como el decreto 2591 del mismo año sostenían que la Corte Constitucional sólo la parte resolutive de la sentencia de constitucionalidad abstracta tenían efectos erga omnes y las decisiones de los fallos de tutela solo tenían efectos inter partes y las motivaciones o razones que llevaban a la decisión en ambos casos solo constituían simples criterios auxiliares.

Pues bien, en este punto ha sido la misma Corte constitucional a través de creaciones jurisprudenciales quienes han fijado el grado vinculante que tienen sus sentencias frente a los demás órganos judiciales y en general a todos los ciudadanos y poderes constituidos.

En ese sentido, la Corte en sentencia C 037 de 1996 al revisar la ley estatutaria de la administración de justicia que establecía las mismas pautas señaladas por los decretos antes mencionados y que de manera perentoria reseñaba que solo el

congreso de la república podía emitir interpretaciones validas para todos, la Corte estableció que muy por el contrario dado que la constitución es norma de normas y que ella aplica a todos los operadores jurídicos y que tiene un intérprete privilegiado cual es la Corte constitucional, pues la interpretación que este organismo hiciera tendría la misma fuerza erga omnes de la que goza la carta política.

Para que no quedará duda de lo anterior, la Corte reiteró el concepto de doctrina constitucional que venia manejando y en ese sentido señaló que las sentencias de revisión de tutela de la Corte constitucional en las que se precisa el contenido y alcance de los derechos constitucionales vinculaban de tal forma la actividad de los jueces que si estos decidían apartarse de la línea jurisprudencial trazada por la Corte debían justificar de manera suficiente y adecuada el motivo que les llevaba a hacerlo so pena de infringir el principio de la igualdad.⁴⁰

Como corolario de la anterior doctrina jurisprudencial la Corte ha admitido incluso que las decisiones jurisprudenciales de la Corte constitucional priman sobre la aplicación de un decreto sin que medie necesidad de una decisión judicial concreta al caso, en ese sentido en la sentencia T 824 de 2002 la Corte constitucional expresó:

“No comparte la sala de revisión el criterio expuesto por la sala laboral del tribunal superior de Bogotá en la sentencia de segunda instancia según el cual el sentencia

⁴⁰ CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, Sala Plena, Sentencia C-037 de 1996. M.P: Vladimiro Naranjo Mesa

jurisprudencial citado y reiterado no es aplicable nuevamente debido a que en la última sentencia en la que se reitero fue proferida el 12 de septiembre y tan solo dos días después el 14 de septiembre el gobierno expidió el decreto 1795 del 2000 mediante el cual regulo el sistema de salud de las fuerzas armadas y de la policía nacional. Las razones para no compartir se exponen a continuación: en primer lugar la decisión jurisprudencial adoptada por la Corte constitucional en cuestión reiterada en múltiples casos encuentra sustento jurídico en las normas constitucionales que consagran los derechos fundamentales cuya protección han invocado los accionantes en cada caso la constitución en tanto norma de normas es superior en jerarquía que los decretos gubernamentales. Si algo de lo dispuesto en un decreto contraviene un mandato constitucional debe aplicarse de manera preferente la carta puesto que es aquel que debe ajustarse a esta y no esta a aquel, si el decreto no contemplo el derecho que tienen los soldados que prestan servicio militar es el decreto el que debe ser inaplicado por el juez de tutela y no la constitución.”⁴¹

Resumiendo todo lo anterior, es posible decir que las sentencias de constitucionalidad sentadas por la Corte Colombiana tiene un alcance bastante amplio en cuanto obliga a todos e inaplica cualquier norma jurídica per se debido a que la Corte como ya se ha podido ver considera que sus sentencias son la voz de la constitución y que en tal sentido como la constitución es superior jerárquicamente a cualquier norma estos deben prevalecer en el ordenamiento jurídico.

En cuanto a los efectos, por regla general y según lo habían dispuesto las normas legales originales, las sentencias de la Corte, en cuanto a sus efectos, tenían aplicaciones estáticas y sin variaciones que se podían resumir en lo siguiente: Cuando se refirieran a sentencias de constitucionalidad podría fácilmente hablarse de efectos erga omnes y obligantes solo a casos futuros, cuando la Corte efectuara revisión de tutela los efectos de sus sentencia serian inter partes y

⁴¹ CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-824 de 2002. M.P: Manuel José Cepeda

cuando aplicará excepciones de inconstitucionalidad tendrían solo efectos inter partes. De manera general, todas las sentencias no tenían efectos hacia el pasado sino solo hacia futuro y sus decisiones debían ir encaminadas a ese factor temporal.

Pues bien, debido a toda la diversificación que la Corte ha hecho de sus tipos de sentencias y a la especialidad de cada una, y aun más a la ampliación de sus poderes que ha realizado por vía jurisprudencial, hoy se puede señalar que la Corte también a modificado sustancialmente la concepción de los efectos que deben tener sus sentencias. Por tal razón es posible realizar un análisis de tales efectos desde dos ópticas: desde los efectos espaciales, hasta los efectos temporales.

6.3.1 Efectos espaciales.

Para efectos del presente trabajo de grado, se entiende por efectos espaciales de las sentencias de la Corte Constitucional aquellos que determinen el alcance poblacional de estos. Es decir a cuantas y cuales personas cobija.

En ese sentido, podría comenzarse por decir que si bien la Corte Constitucional admite que por regla general las sentencias de tutela solo tienen efectos inter partes, ha indicado que las sentencias que mediante una regla de derecho expuesta en su ratio decidendi precisan el alcance y contenido de los derechos

fundamentales, tiene un efecto podría decirse erga omnes, puesto que si bien los jueces pueden apartarse de la misma, deben realizar una justificación especialísima que cumpla con las cargas de identidad y argumentación, establecidas por la Corte, que le permiten apartarse del sentencia.

Al respecto hay que decir que debido a la elaboración de la doctrina del precedente obligatorio de la Corte, hoy en día es especialmente difícil apartarse de tales sentencias cumpliendo con los presupuestos que la Corte ha trazado para hacerlo.

En cuanto a la administración y a los demás ciudadanos, la Corte ha señalado que las sentencias constitucionales los obligan pura y simplemente, de tal manera que no pueden apartarse de ellas.

De otro lado, la Corte también ha admitido en otros casos dos tipos más de efectos espaciales en sus sentencias. El primero tiene que ver cuando la Corte aplica la excepción de Inconstitucionalidad, respecto de una norma y a tal excepción le aplica el efecto Inter pares, que quiere decir que para todos los casos similares la inaplicación que la Corte hace de la norma en cuestión queda automáticamente aplicada de derecho.

Por lo general, la Corte realiza esto cuando se refiere a Sentencias de Tutela donde de por medio se encuentra una norma de carácter reglamentario o legal

que para el caso concreto debería ser aplicada, pero que debido a su palmaria inconstitucionalidad no puede hacerse y la Corte invocando al artículo 4º de la Constitución, ejecuta la llamada excepción de inconstitucionalidad.

Para aplicar este efecto Inter pares, la Corte estableció una serie de condiciones en el Auto 071/2001:

“a) Que la excepción de inconstitucionalidad resulte de la simple comparación de la norma inferior con la Constitución, de la cual surja una violación, no sólo palmaria, sino inmediata y directa de una norma constitucional específica, tal y como ocurre en este caso. b) Que la norma constitucional violada, según la interpretación sentada por la Corte Constitucional, defina de manera clara la regla jurídica que debe ser aplicada, como sucede en este caso porque el artículo 86 de la Constitución dice que la acción de tutela puede ser presentada "ante los jueces, en todo momento y lugar". c) Que la inconstitucionalidad pueda ser apreciada claramente, sin que sea necesario sopesar los hechos particulares del caso y, por lo tanto, la inconstitucionalidad no dependa de tales hechos. d) Que la norma inaplicada regule materias sobre las cuales la Corte Constitucional ha sido investida por la Constitución de una responsabilidad especial, como es el caso de la acción de tutela y la protección efectiva de los derechos fundamentales, en virtud del artículo 241 numeral 9 y del inciso 2 del artículo 86 de la Carta. e) Que la decisión haya sido adoptada por la Sala Plena de la Corte en cumplimiento de su función de unificar la jurisprudencia o haya sido reiterada por ella.”.⁴²

De las reglas anteriormente expuestas puede observarse que la únicas claramente diferenciables son la de que la norma regula materias pertenecientes al ámbito de acción de la Corte Constitucional y que la decisión haya sido adoptada en Sala Plena, puesto que las otras condiciones se derivarían prácticamente de cualquier aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, puesto que el presupuesto esencial para que esta se de es precisamente que las norma presente una

⁴² CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, Sala Plena, Auto 071 de 2001, M.P: Manuel José Cepeda Espinoza.

contradicción evidente, palmaria o de bulto como algunos llaman, con la norma constitucional.

El segundo efecto espacial que la Corte ha definido de manera especial en las sentencias de constitucionalidad que aplica es el Efecto Inter Communis, que consiste básicamente en que la decisión de Tutela adoptada por la Corte es aplicable de manera automáticamente y sin necesidad de otro proceso judicial a terceros no intervinientes en el proceso de tutela, pero que se encuentran en la misma condición que el o los accionantes.

Un ejemplo claro de este efecto que la Corte ha señalado es precisamente cuando se aplica la declaratoria del estado de cosas inconstitucional en el cual las ordenes dadas benefician a toda la población afectada por el estado de cosas inconstitucional, así no hayan participado en el proceso de tutela correspondiente.

Otro ejemplo de este efecto ocurre cuando en una sentencia de revisión de tutela, sin aplicar directamente la declaratoria de estado de cosas inconstitucional, la Corte hace extensivo su fallo a otros afectados que no han intervenido en el proceso judicial respectivo. Así en sentencia T-493 de 2005, la Corte señaló la justificación y alcance de este caso:

“Existen circunstancias especialísimas en las cuales la acción de tutela no se limita a ser un mecanismo judicial subsidiario para evitar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales solamente de los accionantes.

Este supuesto se presenta cuando la protección de derechos fundamentales de los peticionarios atente contra derechos fundamentales de los no tutelantes. Como la tutela no puede contrariar su naturaleza y razón de ser y transformarse en mecanismo de vulneración de derechos fundamentales, dispone también de la fuerza vinculante suficiente para proteger derechos igualmente fundamentales de quienes no han acudido directamente a este medio judicial, siempre que frente al accionado se encuentren en condiciones comunes a las de quienes sí hicieron uso de ella y cuando la orden de protección dada por el juez de tutela repercuta, de manera directa e inmediata, en la vulneración de derechos fundamentales de aquellos no tutelantes.

En otras palabras, hay eventos excepcionales en los cuales los límites de la vulneración deben fijarse en consideración tanto del derecho fundamental del tutelante como del derecho fundamental de quienes no han acudido a la tutela, siempre y cuando se evidencie la necesidad de evitar que la protección de derechos fundamentales del accionante se realice paradójicamente en detrimento de derechos igualmente fundamentales de terceros que se encuentran en condiciones comunes a las de aquel frente a la autoridad o particular accionado.”⁴³

6.3.2 Efectos temporales.

De manera general siempre se ha considerado que los efectos temporales de los sentencias de la Corte debían ser ex nunc, es decir hacia futuro, que en ningún caso regularían un caso ocurrido en el pasado, y que se aplicarían inmediatamente.

Tales consideraciones generales han perdido vigencia, a partir de sentencias diversas de la Corte Constitucional, mediante las cuales esta ha decidido que los efectos temporales de sus sentencias los define ella misma, de acuerdo a las particularidades del caso.

⁴³ CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, Sala Plena, Sentencia T-493 de 2005, M.P: Manuel José Cepeda Espinoza.

De estas sentencias la más importante es la C-037 de 1996, que señaló perentoriamente:

“Como puede apreciarse, los argumentos transcritos resultan concluyentes. A partir de ellos, se torna forzoso concluir -y reiterar- que sólo la Corte Constitucional puede definir los efectos de sus sentencias. La prevalencia del principio de separación funcional de las ramas del poder público (Art. 113 y s.s.), el silencio que guardó la Carta Política para señalar los alcances de las providencias dictadas por los altos tribunales del Estado, la labor trascendental que cumple esta Corporación en el sentido de guardar la supremacía y la integridad de la Carta, y los efectos de “cosa juzgada constitucional” y erga-omnes que tienen sus pronunciamientos (Arts. 243 C.P. y 21 del Decreto 2067 de 1991), son suficientes para inferir que el legislador estatutario no podía delimitar ni establecer reglas en torno a las sentencias que en desarrollo de su labor suprema de control de constitucionalidad ejerce esta Corte.”⁴⁴

De lo anteriormente expuesto se señala que la Corte puede reglamentar los efectos en el tiempo de la manera que le parezca adecuada para garantizar su efectividad.

En este punto, cabe decir que la Corte ha distinguido cuatro tipos de efectos temporales:

1. Los efectos ex nunc que aplican cuando las sentencias no hacen salvedades al respecto y en tal sentido se entiende que aplican solo hacia casos futuros.
2. Los efectos retroactivos que ocurren cuando en la misma providencia judicial la Corte señala que este aplica casos del pasado y define a partir de cuando aplica la regla de derecho establecida.

⁴⁴ CORTE CONSITUCIONAL COLOMBIANA, Sala Plena, Sentencia C-037 de 1996. M.P: Vladimiro Naranjo Mesa.

3. Los efectos Diferidos que ocurren cuando la Corte posterga la fecha de entrada en vigencia de la regla de derecho que ha aplicado, es decir cuando la validez de la providencia dictada se aplaza para una fecha posterior a la de la expedición de la sentencia, caso muy particular como se veía arriba de las sentencias de Inexequibilidad Diferida.

4. Los efectos de temporalidad definida, que ocurren particularmente cuando la acción de tutela es invocada como mecanismo para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual la decisión de la Corte tiene un tiempo preestablecido para que el accionante inicie una acción ordinaria con el fin de amparar su derecho de manera permanente, tiempo que una vez expirado pierde vigencia la decisión de tutela.

6.4 APLICACIÓN DE LAS SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD POR PARTE DE LOS JUECES PARA RESOLVER CASOS POSTERIORES.

Con el fin de verificar como se da la aplicación practica de las sentencias de constitucionalidad la aplicación de 15 encuestas entre jueces y funcionarios judiciales del atlántico que son los encargados de resolver los casos de tutela y son los llamados a aplicar en determinado momentos la sentencias de constitucionalidad que ha emitido con anterioridad la Honorable Corte Constitucional Colombiana, máximo órgano de la jurisdicción constitucional, es un

medio idóneo para determinar la aplicación de los fallos de la corte y su influencia en los demás operadores judiciales existentes en el país.

Los resultados de estas encuestas pueden resumirse así:

aplicación válida de un sistema de sentencias precedenciales en Colombia	Frecuencia	%	Total
si	10	66.66	10
No	5	33.33	5
Total	15	99.99	15

Ante la posibilidad de aplicar válidamente en Colombia un sistema de sentencias precedenciales en Colombia 10 de los 15 encuestados respondieron positivamente, mientras que 5 respondieron negativamente. Se nos muestra una clara tendencia en orden de dos a uno hacia la aceptación de la validez del sistema de sentencias precedenciales en nuestro país.

El sistema de sentencias precedenciales afecta la independencia del juez al momento de la resolución de una controversia jurídica	Frecuencia	%	Total
No	9	60	9
Si	6	40	6
Total	15	100	15

Ante este cuestionamiento, nueve de los quince encuestados respondieron negativamente, mientras que seis consideran que si se ve afectada la independencia del funcionario judicial con el sistema de sentencias precedenciales. Así pues, vemos una clara tendencia a la creencia que el sistema de sentencias precedenciales no afecta para nada la independencia del juez al momento de resolver un litigio, por lo tanto su aplicación no coartaría en nada las funciones del juez de la república como operador judicial e impartidor de justicia.

Actuación de la Corte Constitucional Colombiana como interprete de la constitución nacional.	Frecuencia	%	Total
Excesiva	7	46.6	7
Excelente	5	33.3	5
Moderada	2	13.3	2
Tímida	1	6.6	1
Inocua	0	0	0
Total	15	99.8	15

En la opinión de los encuestados la actuación de la Corte Constitucional Colombiana en su papel como intérprete de la constitución nacional se debate entre lo excesiva y lo excelente. Por la primera opción se inclinaron siete de los quince encuestados y cinco consideran que la actuación de la corte ha sido

excelente, mientras que dos de los encuestados consideran la actuación como moderada, uno como tímida y cero entrevistados la consideran como inocua.

La tendencia en esta pregunta se debate entre las consideraciones de excesivo el papel de la Corte Constitucional Colombiana y la de excelente, lo que nos muestra que si se considera que la Corte ha cumplido con su papel de guardiana e interprete de la constitución nacional al punto que un cuarenta y seis por ciento de los entrevistados ha llegado a considerarla excesiva, implicando un activismo judicial en el desarrollo de una de las funciones encomendadas por la carta magna del 91 a la Corte Constitucional de nuestro país.

Frecuencia con que se utilizan las sentencias emitidas por la Corte Constitucional para dirimir casos diferentes a los de tutela.	Frecuencia	%	Total
Casi nunca	7	46.6	7
Moderadamente	5	33.3	5
Frecuentemente	3	20	3
En todos los casos	0	0	0
Nunca	0	0	0
Total	15	99.9	15

Ante el cuestionamiento de con que frecuencia los funcionarios judiciales encuestados utilizan las sentencias de la Corte Constitucional Colombiana para dirimir casos similares diferentes a los de tutela siete de los encuestados contestaron que casi nunca, cinco aceptaron utilizar este tipo de sentencias moderadamente, tres contestaron que frecuentemente.

En este cuestionamiento, la tendencia por parte de los funcionarios judiciales a utilizar las sentencias emitidas por la Corte constitucional en la resolución de los casos diferentes a los de tutela que llegan a su conocimiento no es clara , se debate entre los que casi nunca las utilizan (46.6%), los que manifiestan utilizarlas moderadamente y cuando lo consideran necesario (33.3%) y los que la utilizan frecuentemente (20%); lo que nos deja ver a las claras que la utilización o no de las sentencias emitidas por la honorable Corte Constitucional Colombiana es un asunto potestativo y discrecional del juez o funcionario encargado de dirimir el conflicto jurídico y no una obligación como lo ha querido imponer esta corte a través de sus sentencias judiciales.

Frecuencia con que se utilizan las sentencias constitucionales para dirimir casos de tutela.	Frecuencia	%	Total
Moderadamente	9	60	9
Frecuentemente	4	26.6	4
Casi nunca	2	13.3	2

En todos los casos	0	0	0
Nunca	0	0	0
Total	15	99.9	15

Con respecto al cuestionamiento de la frecuencia con la cual los operadores de justicia utilizan los fallos emitidos por la Corte Constitucional para dirimir los casos de tutela tenemos que 9 de los quince encuestados contestaron que moderadamente, 4 que frecuentemente y 2 que casi nunca utilizan este tipo de sentencias para dirimir las tutelas que llegan a sus despachos judiciales.

La tendencia en este punto es clara, los funcionarios judiciales utilizan en mayor proporción las sentencias emitidas por la Honorable corte constitucional colombiana en la resolución de los casos de tutela, no en vano 13 de los quince encuestados afirmaron utilizarlas moderada y frecuentemente, lo que nos indica que para la resolución de este tipo de controversias jurídicas se tienen mucho mas en cuenta los pronunciamientos emitidos por el máximo órgano constitucional del país, lo cual resulta lógico porque los procesos de tutela en la practica se han convertido o mejor son de resorte exclusivo de la jurisdicción constitucional no en vano la Corte Constitucional es el organismo de cierre en este tipo de procesos.

El análisis de los anteriores resultados nos permite llegar a las siguientes conclusiones:

En primera instancia, es menester señalar que por lo menos en abstracto los jueces admiten que existe un carácter vinculante de las decisiones de la Corte Constitucional sobre los demás operadores de justicia en el país. Sin embargo y a pesar de que la pregunta directa sobre sentencias precedenciales es contestada afirmativamente por un gran porcentaje de jueces, no es menos cierto que al cuestionar sobre el uso de los mismos en la resolución de casos específicos salta a la vista que los operadores de justicia restringen la aplicación de las sentencias constitucionales únicamente a los casos de resolución de acciones de tutela y que en los casos en los que actúan como jueces ordinarios recurren exclusivamente a lo instituido por el texto legal y por la jurisprudencia de las demás altas cortes según su especialidad.

Lo anterior denota dos fenómenos jurídicos que se tornan interesantes para señalar la efectividad de la actividad de control constitucional en la cotidianidad: en primer lugar los jueces en asuntos ventilados por vía de acción de tutela han aplicado consistentemente la doctrina constitucional y la metodología señalada por la Corte Constitucional, y aun mas se considera a esta como la voz autentica del Estatuto Máximo, pero en asuntos ordinarios y cotidianos sigue prevaleciendo la idea de que antes que aplicar consistentemente interpretaciones y doctrinas constitucionales se debe acudir a la mediación del texto legal y de la voz de la jurisdicciones especializadas en las materias como la Corte Suprema de Justicia en sus distintas salas y el Consejo de Estado en los asuntos administrativos.

En segundo lugar un resultado concreto de las encuestas es que los jueces no se ven afectados en su independencia por el accionar de la Corte Constitucional. Lo anterior es explicable en la medida en dos factores esenciales: Primero que los fallos de la Corte, por lo menos en su contenido han sido acogidos por la mayor parte de los operadores judiciales con buen ánimo y segundo que existe por lo menos la concepción interna que las sentencias de la Corte Constitucional solo afectan los asuntos ventilables por vía de tutela y que no tocan en absoluto los que por su naturaleza se consideran ordinarios de cada operador judicial.

Un tercer y último punto en que se puede hacer hincapié es en la división de opiniones sobre la amplitud e intensidad de la labor desarrollada por la Corte Constitucional, y es que en este acápite se pueden notar dos posiciones que oscilan entre aquellos que perciben que la actividad de la Corte como excesiva y que ya se inmiscuye en aquellos aspectos propios de la jurisdicción ordinaria y aquellos que señalan que la actividad de la Corte debe seguirse ampliando y señalan que ha sido moderada, e incluso tímida, lo que indica que la fase de consolidación e interiorización del carácter vinculante del precedente constitucional aun dista de estar acabada en los demás operadores judiciales.

En conjunto puede decirse que si bien el Control Constitucional ha sido ampliado y fortalecido por la actividad de la Corte Constitucional y la definición de la metodología y el tipo de sentencias utilizadas, los operadores de justicia lo han ido restringiendo a ser utilizado solo para dirimir los casos de tutela que llegan a su

despacho, limitándolo como si esas sentencias fueran del resorte exclusivo de la jurisdicción constitucional y no tocaran para nada las demás jurisdicciones como la civil, laboral, administrativa y penal.

Esta limitación pareciera no tener en cuenta que según la jurisprudencia constitucional sus sentencias tienen alcance en todas las orbitas y jurisdicciones nacionales debido a que por mandato de la misma carta magna su único interprete privilegiado y autorizado es la Corte Constitucional y al tenor del artículo 4 de la misma la constitución nacional es norma de normas, por ende la interpretación que de ella haga su interprete tiene carácter vinculante y como tal se aplica en todas las orbitas y jurisdicciones del ámbito legal Colombiano.

7. CONCLUSIONES

El recorrido por las distintas formas contemporáneas de control constitucional permite señalar rasgos comunes que hoy sugieren unos elementos básicos y unificados alrededor de la labor de los Tribunales Constitucionales actuales. De todos estos rasgos el mas inconfundible es el de la primacía de la eficacia de la aplicación del texto constitucional representado en sus valores, por encima del significado semántico de las palabras que contiene el Estatuto Máximo, en otras palabras el triunfo de los nuevos Métodos de Interpretación Alternativos sobre los antiguos sistemas hermenéuticos de la época pre y post savignyana.

En ese orden de ideas el principio básico del actual sistema de control consiste en la premisa que la función del control constitucional, es corolario del principio fundamental de la suprallegalidad e intangibilidad de la Constitución y por ende, tiene que ser efectivo, por su misma definición.

No puede ser teórico, inoficioso o vago, y menos aún convertirse en rey de burlas. Aunque la Corte Constitucional, al proferir una sentencia sobre hechos ya ocurridos, ejerce un magisterio moral que le permite trazar las directrices jurisprudenciales que hacia el futuro deban tenerse en cuenta al resolver sobre casos similares -pues aun en ese tipo de fallos la Corte interpreta la Constitución-, lo cierto es que el sistema de control estatuido y el concepto mismo de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución únicamente tienen sentido cuando

en efecto los fallos de constitucionalidad logran que los valores, principios y normas del Estatuto Fundamental permanezcan indemnes; cuando se preserva el imperio de la Constitución, y cuando se impide eficazmente la vigencia de disposiciones a ella contrarias.

Ese principio de la efectividad del control constitucional tiene su mayor manifestación en que es el mismo Tribunal Constitucional quien señala los alcances y limitaciones del texto constitucional y quien define el sentido que esta tiene, en aras de su protección y sobretodo de hacerla efectiva frente a las potestades del legislador y del ejecutivo. En el caso colombiano es la misma Corte quien se ha encargado de señalar que la función a ella confiada implica no solo que esa Corporación fije el alcance y las consecuencias de los postulados, valores y mandatos constitucionales, sino que previo a la evaluación propia del juicio de constitucionalidad, es ese Tribunal quien debe señalar la manera como entiende la regla de derecho superior y aun la que ha sometido a su escrutinio.

Por ultimo, no es de soslayar que el control constitucional ha demostrado no ser una teoría jurídica acabada en la determinación de los linderos y características que la definen, sino que por el contrario y debido a su constante expansión, es un concepto en formación permanente y que responde no solo a consideraciones de tipo jurídico, sino políticas y sociales, yendo de la mano de la perenne transformación de su cuerpo doctrinario y filosófico madre: El Derecho Constitucional Contemporáneo

BIBLIOGRAFÍA

BERNAL CANO, Natalia, El Control De Constitucionalidad De La Ley, Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá 2.003. 235 Páginas.

CERRA JIMENEZ, Luis Eduardo, Título De Legitimidad Del Precedente Judicial Vinculante, Editorial Nobel. Barranquilla 2001. 98 Páginas

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-109 1995, Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero.

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-037 1996, Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Meza.

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-221 1997, Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero.

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-925 2000, Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo.

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-426 2002, Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil.

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-211 2003, Magistrado Ponente Clara Vargas Hernández.

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-038 2006, Magistrado Ponente Humberto Sierra Porto.

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-820 2006, Magistrado Ponente Marco Monroy Cabra.

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-208 2007, Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-824 2000, Magistrado Ponente Manuel José Cepeda.

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-025 2004, Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinoza.

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-493 2005, Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinoza.

CORTE CONSTITUCIONAL, Auto 071 2001, Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinoza.

CORTE CONSTITUCIONAL, Auto 031 B 2002, Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra.

CORTE CONSTITUCIONAL, Auto 223 2006, Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño.

CORTE CONSTITUCIONAL, Auto 161 2004, Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra.

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia SU-168 1994, Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia SU-640 1998, Magistrado Ponente Eduardo Montealegre.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, Editorial Librería Jurídica Sánchez R. Ltda. Bogotá 2002. 440 Páginas.

HENAO HIDRON, Javier, Panorama del Derecho Constitucional Colombiano, Editorial Temis. Bogotá 2001. 281 Páginas

HERNANDEZ, José Gregorio, Poder Y Constitución, Editorial Temis. Bogotá 2.008. 434 Páginas

MONROY CABRA, Marco Gerardo, Introducción al Derecho. Editorial Temis. Bogotá 2001. 554 Páginas.

SANDOVAL DUQUE, Oscar y otros, Justicia Constitucional Y Democracia En El Siglo XXI, Editorial Universidad Autónoma De Occidente, Cali 2009. 324 Páginas.

SANÍN RESTREPO, Ricardo y otros, Justicia Constitucional: El Rol de la Corte Constitucional en el Estado Contemporáneo, Editorial Legis. Bogotá 2006. 311 Páginas.

ZULETA CANO, José y otros, Constitución Política Colombiana de 1991 Confrontada Con La De 1886, Editorial Librería Jurídica Sánchez R. Ltda. , Medellín 2.004. 277 Páginas.

ANEXOS

ANEXO A

CUADRO DE SENTENCIAS EXPUESTAS EN EL TRABAJO FINAL

	IDENTIFICACION SENTENCIA	ÓRGANO QUE LA EMITIÓ	ALCANCE DECISION
1.	Martin V. Hunter's Lessee	Corte Suprema De Justicia E.E.U.U	Defiende la competencia de la Corte suprema federal para revocar cualquier sentencia.
2.	Plessy Vs Fergusson. 1869	Corte Suprema De Justicia E.E.U.U	Separados Pero Iguales. No viola el principio de igualdad el hecho de no admitir personas de raza negra en establecimientos exclusivos para personas de raza blanca, siempre y cuando la misma prohibición fuera valida para las personas de raza blanca en establecimientos exclusivos de raza negra.
3.	Brown Vs Junta escolar.	Corte Suprema De Justicia E.E.U.U.	Declaró inconstitucional la segregación racial en las escuelas estadounidenses, basándose en la evolución en el tiempo y el espacio de los principios fundamentales como la libertad y la igualdad
4.	Ashwander Vs Tva 1936	Corte Suprema De Justicia E.E.U.U	Reglas Brandeis. En que casos es procedente dictar una sentencia de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia De Los Estados Unidos.

5	sentencia 125 de 1988	Corte Constitucional Italiana	Sentencias de constitucionalidad aditiva. Frente a una omisión legislativa discriminatoria del legislador en cuanto solamente ordeno que se diera un subsidio de vivienda a los residentes de Roma de estratos menos favorecidos, la Corte la subsano ordenando que la suman que reciban los beneficiarios se distribuyan entre todos los que tienen el mismo derecho que ellos adicionando de esta forma la ley en su contenido normativo
6	decisión 80-127 de 1981	Consejo Constitucional Francés	Reserva de interpretación neutralizante. El Consejo revisó la norma orgánica en la cual se establecía que la seguridad era un derecho fundamental y primario de todos los ciudadanos Franceses y consideró que esta norma era constitucional siempre y cuando se entendiera que su aplicación no implicaba una disminución o menoscabo de las libertades fundamentales de los ciudadanos, bajo cualquier otra interpretación era inconstitucional
7	sentencia 232 de 1998	Corte Constitucional Italiana	Sentencia interpretativa de desestimación. Los términos procesales deben aplicarse de manera favorable al accionante del proceso judicial respectivo de conformidad con los principios y valores de la

			constitución italiana. Cualquier duda jurídica debe resolverse a favor del accionante, otra interpretación más restrictiva daría lugar a la inconstitucionalidad de la norma
8	Decisión 83164	Consejo Constitucional Francés	Reserva de interpretación directiva, en la cual le señaló al parlamento las modificaciones que debían hacerse a la norma sobre todo en materia de defensa y debido proceso y dio un plazo de dos años para que fueran acogidas
9	sentencia rol 155 de 1996	Corte Constitucional Italiana	Sentencia Manipulativa. No se considerará como causal de incompatibilidad judicial el conocimiento previo de los actos materia del proceso”. se declaró inconstitucional la palabra NO,
10	Auto 161 de 2004, Sala Plena, M.P: Alfredo Beltrán Sierra.	Corte Constitucional Colombiana.	El juicio de inconstitucionalidad puede versar sobre interpretaciones jurídicas de las altas Cortes sobre una norma, para decidir si esta interpretación es o no concordante con los postulados de la constitución
11	Sentencia C 037 de 1996. M.P: Vladimiro Naranjo Mesa	Corte Constitucional Colombiana	Las sentencias de revisión de tutela de la Corte constitucional en las que se precisa el contenido y alcance de los derechos constitucionales vinculaban de tal forma la actividad de los jueces que si estos decidían

			<p>apartarse de la línea jurisprudencial trazada por la Corte debían justificar de manera suficiente y adecuada el motivo que les llevaba a hacerlo so pena de infringir el principio de la igualdad</p>
12	<p>Sentencia T-824 de 2002.</p> <p>M.P: Manuel José Cepeda</p>	<p>Corte Constitucional Colombiana</p>	<p>Las decisiones jurisprudenciales de la Corte constitucional priman sobre la aplicación de un decreto sin que medie necesidad de una decisión judicial concreta al caso</p>
13	<p>Auto 031B de 2002, Sala Plena, M.P: Alfredo Beltrán Sierra</p>	<p>Corte Constitucional Colombiana</p>	<p>Definió y justifico las figuras de la cosa juzgada relativa implícita y explícita.”De manera excepcional la Corte constitucional al fijar el alcance de sus decisiones y con el propósito de preservar el conjunto de garantías que hacen parte de nuestro sistema de control de constitucionalidad puede optar por limitar el alcance de la cosa juzgada de manera que esta no sea absoluta sino relativa a los cargos analizados en la sentencia.- de lo anterior se colige que la Corte en ejercicio de sus funciones tiene la posibilidad de atenuar el carácter absoluto de la cosa juzgada restringiendo el fallo de constitucionalidad</p>

			<p>a la confrontación de la disposición demandada con algunas y no todas las disposiciones constitucionales, de esta manera la Corte confiere una inmunidad parcial al dispositivo sub examine permitiendo la interposición de nueva demandas por cargos diferentes a los que han hecho transito a la cosa juzgada absoluta ... por regla general la limitación de la cosa juzgada debe constar en la parte resolutive de la sentencia”</p>
14	<p>Sentencia C-925 de 2000, Sala Plena, M.P:</p> <p>José Gregorio Hernández Galindo</p>	<p>Corte Constitucional Colombiana</p>	<p>Definió cosa juzgada aparente. En cambio cuando esta corporación ha desarrollado el concepto de la cosa juzgada aparente ha querido referirse a situaciones en las cuales en realidad la norma de que se trata no fue objeto de examen de constitucionalidad alguno aunque parezca que lo halla sido.... De lo cual surge por aplicación del artículo 228 de la constitución (prevalencia del derecho sustancial) y por el sentido mismo de un verdadero control de constitucionalidad el necesario reconocimiento de que en vez de cosa juzgada hay cosa no juzgada y la consecuente declaración de que la Corte puede entrar en el fondo para dictaminar si el precepto correspondiente se ajusta o no</p>

			a la carta política sin violar por ello el principio consagrado en su artículo 243
15	Sentencia C-211 de 2003, Sala Plena, M.P: Clara Inés Vargas Hernández	Corte Constitucional Colombiana	Aspectos facticos y no jurídicos pueden relativizar la cosa juzgada incluso la absoluta pudiendo el juez constitucional volver a hacer el examen de una norma aun cuando la constitucionalidad de la misma no se ha relativizado ni siquiera en la parte motiva
16	Sentencia C-221 de 1997, Sala Plena, M.P: Alejandro Martínez Caballero.	Corte Constitucional Colombiana	Sentencia de inconstitucionalidad diferida. “Con esta decisión, de carácter meramente temporal se otorga al congreso la posibilidad de que en ejercicio de su libertad de configuración política y dentro del plazo necesario pueda expedir la norma que corrija las deficiencias constitucionales verificadas en el artículo demandado... la expulsión pura y simple de esa disposición del ordenamiento puede conducir a una situación legal que es peor desde el punto de vista de los valores constitucionales, ya sea por los vacíos que se puedan generar, ya sea porque la propia decisión del juez constitucional vulnera la libertad de configuración del congreso”.
16	Sentencia C-037 de	Corte Constitucional	Sentencia de inconstitucionalidad parcial. La Corte declaro

	1996, M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa	Colombiana	inexequibles en vez de la totalidad del artículo, únicamente las expresiones sólo y congreso de la república para dar lugar entonces a un sentido normativo en el cual no solo reivindicaba que la interpretación que ella hace tiene carácter obligatorio sino que excluía al mismo congreso de la interpretación de las normas constitucionales
17	Sentencia C-426 de 2002, M.P: Rodrigo Escobar Gil	Corte Constitucional Colombiana	Sentencia de interpretación condicionada constitucional. la Corte mediante sentencia de constitucionalidad removió del ordenamiento jurídico la interpretación que había hecho el Consejo de Estado de la procedencia de la demanda de nulidad simple de un acto administrativo de carácter particular, de acuerdo a la doctrina de los móviles y las finalidades
18	Sentencia C-820 de 2006, M.P: Marco Gerardo Monroy C.	Corte Constitucional Colombiana	Sentencia e Interpretación Condicionada Constitucional. La Corte admitió que puede interpretar con autoridad el Contenido de una ley oscura o ambigua para definir en ella una Interpretación que se adecue a la Carta Política
19	Sentencia C-109 de 1995, M.P: Alejandro	Corte Constitucional Colombiana	Sentencia de constitucionalidad integradora. La sentencia integradora es una modalidad de decisión por medio de la cual, el juez

	Martínez Caballero		<p>constitucional, en virtud del valor normativo de la Carta (CP art. 4), proyecta los mandatos constitucionales en la legislación ordinaria, para de esa manera integrar aparentes vacíos normativos o hacer frente a las inevitables indeterminaciones del orden legal. En ello reside la función integradora de la doctrina constitucional, cuya obligatoriedad, como fuente de derecho, ya ha sido reconocida por esta Corporación. Y no podía ser de otra forma, porque la Constitución no es un simple sistema de fuentes sino que es en sí misma una norma jurídica, y no cualquier norma, sino la norma suprema (CP art. 4), por lo cual sus mandatos irradian y condicionan la validez de todo el ordenamiento jurídico.</p>
	Sentencia C-208 de 2007, M.P: Rodrigo Escobar Gil	Corte Constitucional Colombiana	<p>Sentencia de constitucionalidad integradora. "Para precisar cuales son las opciones aplicables al propósito de reparar una omisión legislativa contraria a la Constitución, la Corte sostiene que es preciso tener en cuenta que, como quiera que en tales hipótesis la inconstitucionalidad no radica en los contenidos normativos que cuentan con base textual expresa, sino en un significado implícito que surte efectos violatorios</p>

			<p>de la Carta, la depuración del ordenamiento no se logra mediante el decreto de la inexequibilidad de las disposiciones de la cuales se predica la omisión y que lo conducente es neutralizar el comentado efecto de la omisión legislativa que riñe con la Constitución y en su lugar incorporar un significado que sea acorde con los dictados superiores... Cuando esa solución no es posible, porque la omisión no se desprende de la exclusión de algunos sujetos en circunstancias en las cuales cabía predicar el imperativo constitucional de una identidad de régimen jurídico, se ha planteado la alternativa de una sentencia integradora que permita mantener la disposición enjuiciada en el ordenamiento y superar la inconstitucionalidad derivada de la omisión “.</p>
	<p>Sentencia C-112 de 2000, M.P: Alejandro Martínez Caballero.</p>	<p>Corte Constitucional Colombiana</p>	<p>Sentencia de constitucionalidad integradora. “ puede también la Corte llenar ella misma el vacío legal que produce la declaración de inexequibilidad de la disposición acusada por medio de una modalidad de sentencia integradora pues el vacío de regulación es llenado por medio de un nuevo mandato que la sentencia integra la sistema</p>

			<p>jurídico, proyectando directamente los mandatos constitucionales en el ordenamiento legal... ahora bien con tales criterios es claro que en este caso procede una sentencia integradora por cuanto la Corte ha concluido que la ley puede válidamente establecer que es competente el juez del lugar de residencia de los contrayentes, pero que es inconstitucional proferir el domicilio de la mujer. Por ende esta corporación debe declara la exequibilidad del mandato relativo al domicilio de los contrayentes, pero la inconstitucionalidad de la referencia exclusiva la lugar de residencia de la mujer. En tal contexto el vacío normativo resultante solo pueda ser llenado de una forma y es la siguiente en virtud del principio de igualdad entre los sexos debe entenderse que el funcionario competente para celebrar el matrimonio es el juez municipal o promiscuo de la vecindad de cualquiera de los contrayentes a prevención”</p>
	<p>Sentencia SU – 090 de 2000, M.P: Eduardo Cifuentes Muñoz.</p>	<p>Corte Constitucional Colombiana</p>	<p>Estado de cosa inconstitucional. Se esta ante un estado de cosas inconstitucional cuando se presenta una violación de derechos fundamentales de muchas personas - que pueden entonces recurrir a</p>

			la acción de tutela para obtener la defensa de sus derechos y colmar así los despachos judiciales - y cuando la causa de esa vulneración no es imputable únicamente a la autoridad demandada, sino que reposa en factores estructurales.
	Sentencia T-025 de 2004, M.P: Manuel José Cepeda	Corte Constitucional Colombiana	Declaró el estado de cosa inconstitucional en la población desplazada Colombiana y realizó una compilación de la doctrina constitucional sobre este tipo de sentencias.
	Auto 223 de 2006, M.P: Jaime Córdova Triviño	Corte Constitucional Colombiana	elaboró una compilación de los elementos que ha desarrollado la Corte para admitir que en determinado caso ya hay regla de derecho sobre precisión y alcance de los derechos fundamentales.
	Auto 071 de 2001, M.P: Manuel José Cepeda Espinoza.	Corte Constitucional Colombiana	Establece una serie de condiciones necesarias para aplicar en la sentencia el efecto Inter pares.
	Sentencia T-493 de 2005, M.P: Manuel	Corte Constitucional Colombiana	Aplicación del efecto inter comunis. "hay eventos excepcionales en los cuales los límites de la vulneración deben fijarse en consideración

	José Cepeda E.		tanto del derecho fundamental del tutelante como del derecho fundamental de quienes no han acudido a la tutela, siempre y cuando se evidencie la necesidad de evitar que la protección de derechos fundamentales del accionante se realice paradójicamente en detrimento de derechos igualmente fundamentales de terceros que se encuentran en condiciones comunes a las de aquel frente a la autoridad o particular accionado”.
	Sentencia C-037 de 1996. M.P: Vladimiro Naranjo Mesa.	Corte Constitucional Colombiana	Sólo la Corte Constitucional puede definir los efectos de sus sentencias.

ANEXO B

CUADRO COMPARATIVO MODELOS DE SENTENCIAS UTILIZADOS EN EUROPA Y COLOMBIA.

	PAÍS	ALEMANIA	ITALIA	FRANCIA	COLOMBIA
	TIPO SENTENCIA				
SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD	SENTENCIA CONSTITUCIONALIDAD	SENTENCIA CONSTITUCIONALIDAD	SENTENCIA CONSTITUCIONALIDAD	SENTENCIA CONSTITUCIONALIDAD	SENTENCIA CONSTITUCIONALIDAD SIMPLE
					SENTENCIA CONSTITUCIONALIDAD RESTRINGIDA
	SENTENCIA INCONSTITUCIONALIDAD	SENTENCIA INCONSTITUCIONALIDAD	SENTENCIA INCONSTITUCIONALIDAD	SENTENCIA INCONSTITUCIONALIDAD	SENTENCIA INCONSTITUCIONALIDAD SIMPLE
					SENTENCIA INCONSTITUCIONALIDAD DIFERIDA

					SENTENCIAS INCONSTITUCIONALIDAD PARCIAL
SENTENCIAS MODULATIVAS	SENTENCIAS ADITIVAS	NO APLICAN	SENTENCIAS ADITICAS	REERVA DE INTERPRETACION CONSTRUCTIVA	SENTENCIA CONSTITUCIONALIDAD INTEGRADORA
	SENTENCIAS INTERPRETATIVAS	SENTENCIA COMPATIBILIDAD BAJO INTERPRETACION CONFORME	SENTENCIA INTERPRETATIVA DESESTIMATORIA	RESERVA DE INTERPRETACION NEUTRALIZANTE	SENTENCIA INTERPRETATIVA DE DERECHOS COSNTITUCIONALES
			SENTENCIA INTERPRETATIVA ESTIMATORIA		
	SENTENCIAS EXHORTATIVAS	SENTENCIA INCOMPATIBILIDAD	NO APLICA	RESERVA INTEPRETACIÓN DIRECTIVA	SENTENCIA INTERPREATCION CONDICIONADA CONSTITUCIONAL
	SENTENCIAS MANIPULATIVAS	NO APLICA	SENTENCIA MANIPULATIVAS	NO APLICA	SENTENCIA INCONSTITUCIONALIDAD PARCIAL
		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	ESTADO DE COSA INCONSTITUCIONAL

ANEXO C

MODELO DE ENCUESTA SOBRE EL CARÁCTER VINCULNTE DE LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES EN LA PRÁCTICA JUDICIAL COLOMBIANA.

OBJETIVO: Determinar el grado de aceptación y de aplicabilidad que tienen las sentencias constitucionales en la resolución de casos por parte de los jueces y magistrados del Atlántico.

ENCUESTA N°

1. ¿Cree usted que en Colombia a la luz de la Constitución es posible hablar aplicar válidamente un sistema de sentencias precedenciales?

1.1 si _____ 1.2 no _____

2. ¿Cree usted que el sistema de sentencias judiciales anteriores afecta la independencia del juez en Colombia?

1.1 si _____ 1.2 no _____

3. ¿Cómo considera la actuación que como intérprete de la Constitución ha ejercido la Corte Constitucional?

31. Excesiva. _____

3 2. Excelente. _____

3.3. Moderada.____

3.4. Tímida. ____

3.5. Inocua.____

4. ¿En procesos diferentes a los de tutela que tanto utiliza usted los sentencias constitucionales fijados por la Corte para resolver los casos que se le plantea?

4. 1. En todos los Casos.____

4.2. Frecuentemente. ____

4.3. Moderadamente.____

4.4. Casi Nunca. ____

4.5. Nunca.____

5. ¿En procesos de Tutela que tanto utiliza usted los sentencias constitucionales fijados por la Corte para resolver los casos que se le plantea?

5.1. En todos los Casos.____

5.2. Frecuentemente.____

5. 3. Moderadamente. ____

5.4. Casi Nunca.____

5. 5. Nunca.____

ANEXO D

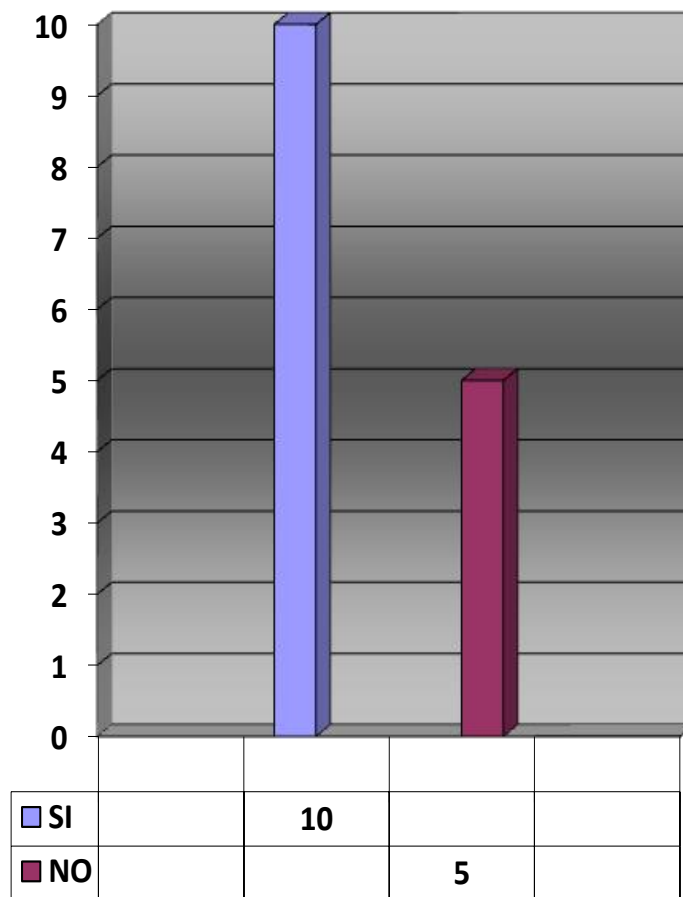
TABLA RESULTADOS ENCUESTA SOBRE LA APLICACIÓN DEL SENTENCIA
EN LA PRÁCTICA JUDICIAL COLOMBIANA

[illegible]

[illegible]

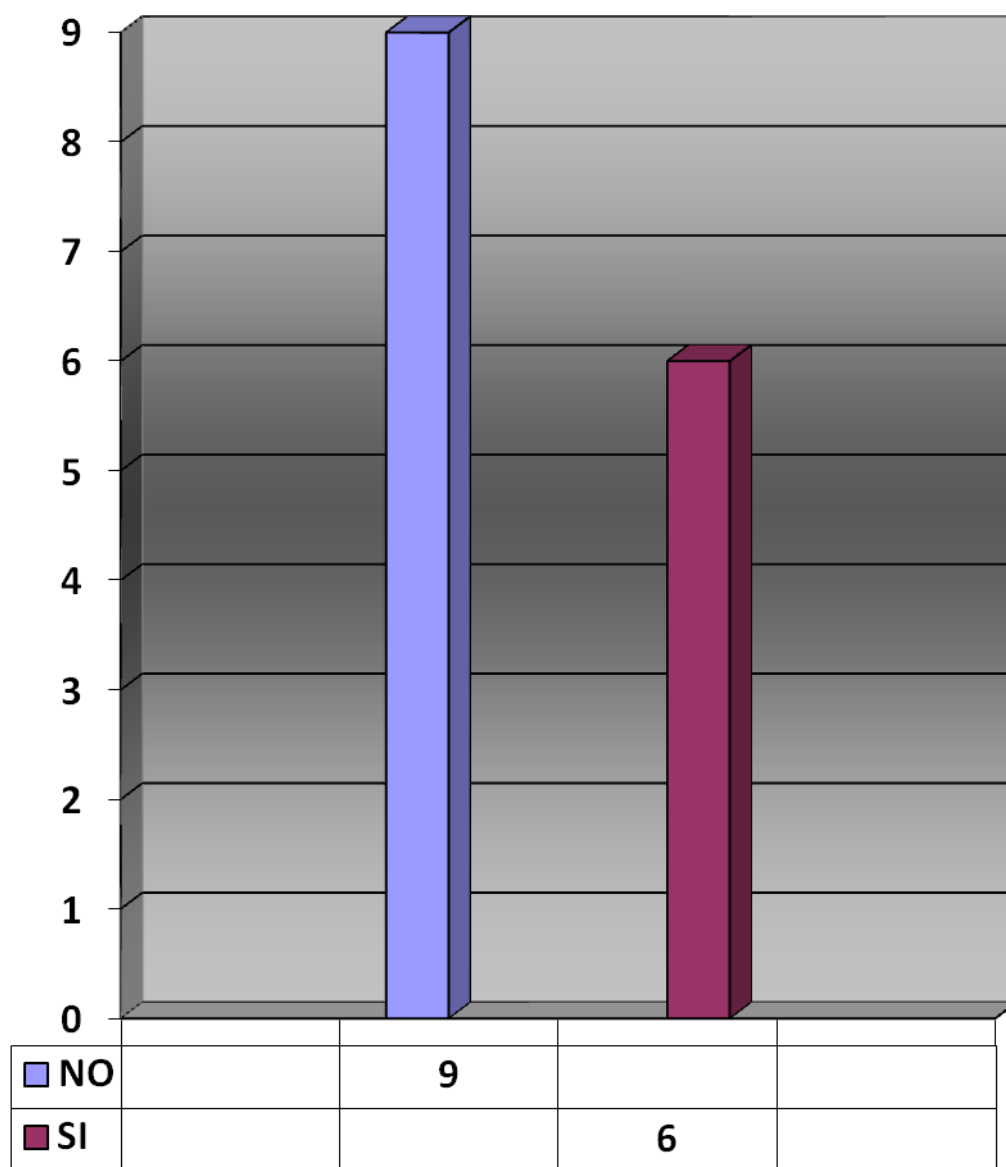
ANEXO E

GRÁFICA POSIBILIDAD DE APLICACIÓN VALIDA DEL SISTEMA DE SENTENCIAS PRECEDENCIALES EN COLOMBIA



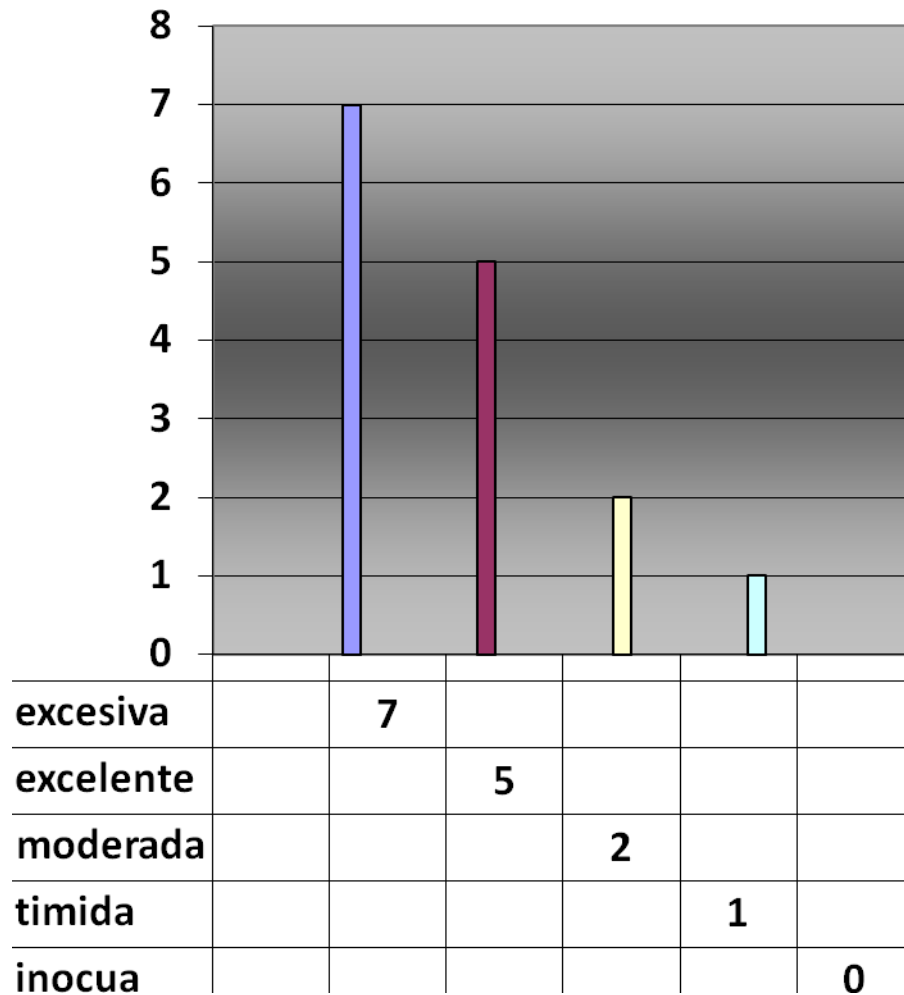
ANEXO F

GRÁFICA EL SISTEMA DE SENTENCIAS PRECEDENCIALES AFECTA LA INDEPENDENCIA DEL JUEZ.



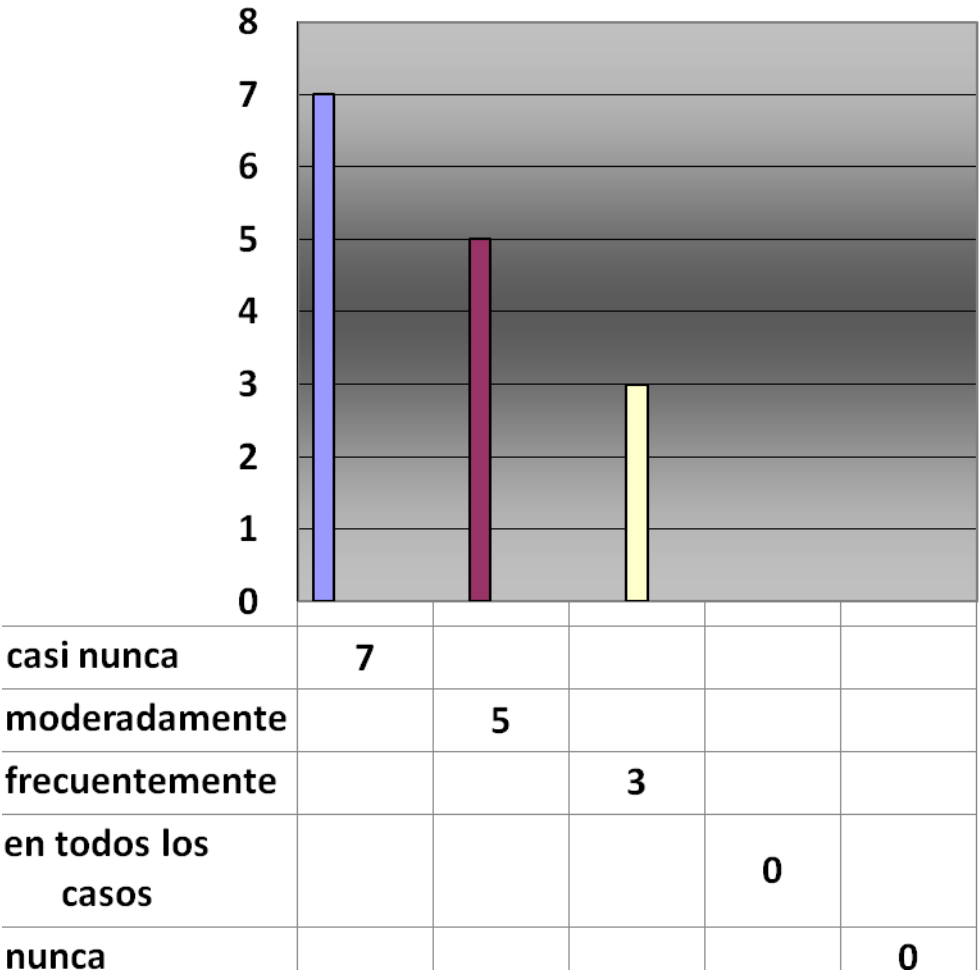
ANEXO G

GRÁFICA ACTUACIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL COMO INTERPRETE DE LA CONSTITUCIÓN.



ANEXO H

GRÁFICA FRECUENCIA CON LA QUE UTILIZA LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES PARA DIRIMIR CASOS DISTINTOS A LOS DE TUTELA



ANEXO I

GRÁFICA FRECUENCIA CON QUE UTILIZA LOS SENTENCIAS
CONSTITUCIONALES PARA RESOLVER CASOS DE TUTELA

